Microfinanzas para la mujer rural

Para llegar a la casa de Adelaida Morán hay que recorrer 30 kilómetros de caminos de tierra. Vive en Capira, un pueblo panameño con solo 200 vecinos. En pueblos como el suyo, ubicados en zonas alejadas y de difícil acceso, se puede ver cómo las microfinanzas pueden cambiar la vida de las personas de escasos recursos.

Adelaida utilizó los 200 dólares del primer préstamo que recibió de [Microserfin](#), entidad de la [Fundación Microfinanzas BBVA](#) (FMBBVA) en Panamá, para montar una abarrotería, una “tiendita pequeña”, como ella la define, donde vende comestibles y productos varios, con los que abastece a su comunidad.

Como les ocurre a muchas personas de América Latina que deciden emprender, Adelaida ha tenido que adecuar su vivienda para desarrollar allí su pequeño negocio.

Por ese motivo, destinó el segundo crédito, de 750 dólares, a retirar el suelo de tierra y las paredes de hojas de palmera de su casa. Lo hizo gracias a [CASAFIN](#), un producto, que además del apoyo financiero, identifica las necesidades de las obras a acometer y las adapta al desarrollo del negocio. “Me siento segura porque las paredes y el suelo ahora son de cemento y el techo de zinc. Además, hemos comprado paneles solares para tener luz”, explica esta emprendedora.

Un crédito para cada etapa del negocio

Conoció a Microserfin por una promoción radiofónica. Acudió a la entidad y desde ese día, hace ya ocho años y diez créditos, su negocio ha ido creciendo. “Sin duda, desde ese momento, hay un antes y un después en nuestra vida”, afirma.

Durante este tiempo, los asesores de la entidad de la FMBBVA la han ayudado con la gestión del negocio. “El asesor te asesora, te visita. Así sé lo que puedo gastar y estoy al día con mis pagos”, detalla.

Al igual que a miles de emprendedores, la pandemia ha afectado a Adelaida. Ha tenido que cerrar la abarrotería, ya que las medidas de distanciamiento social impedían a los clientes ir a comprar, tampoco podía reponer género y los productos se encarecieron. Sin embargo, ha seguido teniendo ingresos gracias a la diversificación de su negocio, que ya tenía antes del COVID-19. Así ha podido mantener a sus tres trabajadores, con el cultivo de café y limones, y con la cría de cerdos y gallinas.

Además, el coche que compró con otro de los créditos de Microserfin la ha ayudado a vender sus productos y a acercar a sus vecinos al hospital cuando lo han necesitado.

Desde Microserfin, ha recibido las medidas de alivio financiero que la entidad puso en marcha en 2020 para mitigar el impacto de la pandemia en los negocios de todos los emprendedores a los que atiende.

Emprender para tener más oportunidades

En la región, muchas mujeres de pocos recursos emprenden para mejorar la situación de sus familias, especialmente la de sus hijos, para que tengan más oportunidades y accedan a una formación que en la mayoría de los casos, ellas no tuvieron.

Adelaida lo tiene muy claro: “La salud y la educación de mis hijos es fundamental. Ellos deben luchar para estudiar. Con estudios se sale adelante”, afirma con contundencia. De hecho, una de sus hijas ya

está estudiando Contabilidad en la universidad.

Mientras, Adelaida no deja de pensar en mejorar, en cumplir más sueños cuando la pandemia lo permita. Quiere ampliar su casa y habilitar un espacio multifuncional que pueda alquilar para eventos, fiestas y otras actividades.

Como ella misma dice, “las mujeres rurales luchamos por salir adelante. Con lluvia o sol uno no se queda ahí, siempre se trata de hacer algo”.

Beca Transformando Realidades, una puerta a las oportunidades

El sueño de todo padre o madre es que sus hijos tengan una vida mejor y alcancen logros que superen los suyos propios. Es el caso de los emprendedores de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), para los que sacar adelante a sus familias y conseguir un futuro mejor para sus hijos es en muchas ocasiones el motor de su actividad.

Conocedores de esta prioridad, y apostando por la Educación como “puerta a las oportunidades”, BBVA y Bancamía, entidad colombiana de la FMBBVA, pusieron en marcha en 2020, en medio de un panorama marcado por la pandemia, la **Beca Transformando Realidades**, una iniciativa que premia a hijos de microempresarios, clientes de Bancamía, costeadando sus estudios universitarios.

Cada becado obtiene el pago de sus semestres y una ayuda de manutención mensual, por el tiempo que dure la carrera. Además reciben un ordenador como herramienta de apoyo para sus estudios.

La beca está dirigida a jóvenes que han terminado el bachillerato o están cursando el último año, que pueden optar a hacer realidad este sueño y convertirse en profesionales, y en muchos casos en las primeras personas en sus familias en tener estudios superiores.

En 2021, cerca de 1.000 microempresarios/as de 320 municipios colombianos presentaron las candidaturas de sus hijos, un aumento de más de 60% respecto al año anterior. De ellos, el 72% fueron mujeres emprendedoras, el 81% se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, el 34% viven en zonas rurales y el 42% tienen educación primaria a lo sumo.

El ganador de esta edición fue **Sebastián Carreño, de 17 años**, hijo de la microempresaria Yamile Pinzón, de 34, que se dedica al cultivo del cacao y el aguacate. Este joven colombiano siempre tuvo claro que quería estudiar, sin importarle las largas distancias que debía recorrer desde la zona rural donde vive de El Vergel, en el municipio El Carmen de Chucurí, para llegar a su colegio.

Sebastián ve ahora cumplido su sueño de formarse en la universidad gracias a la beca Transformando Realidades de BBVA-Bancamía. Estudia Ingeniería Agrónoma con el objetivo de aprender cómo trabajar la tierra y poder enseñar también estos conocimientos en su comunidad.

Junto a él, [otros cuatro jóvenes recibieron las becas](#) de manos del presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, quien destacó que “la educación es la puerta a las oportunidades, la clave en el avance de las personas y en el desarrollo de la sociedad. Es un motor de crecimiento y una fuerza para corregir las desigualdades que existen en nuestra sociedad”.

Un total de 10 jóvenes ya estudian con estas becas, haciendo realidad sus ganas de prosperar gracias a su esfuerzo y el de sus padres, los verdaderos ganadores de esta oportunidad de futuro, que es a la vez un reconocimiento a su labor diaria como emprendedores para sacar adelante a sus familias.

Vulnerabilidad y Educación Financiera

Claudio González-Vega es economista y abogado costarricense, con Maestría de la London School of Economics y Doctorado de Stanford University. Profesor Emérito, fue director del Programa Finanzas Rurales en la Ohio State University. Es patrono de la Fundación Microfinanzas BBVA.

La educación financiera es central para superar la vulnerabilidad, un aspecto inevitable de la vida que ocurre de diversas maneras. En países ricos, eventos inesperados son una amenaza para los ingresos salariales y pueden provocar que los hogares no logren sostener sus gastos. Excepto durante choques sistémicos (covid-19), la vulnerabilidad aguda es la excepción.

Sin embargo, en países pobres, es un reto diario. Los pobres generan ingresos con empleos informales o pequeñas parcelas de subsistencia. Sus ingresos diarios son demasiado bajos, irregulares e impredecibles. Su consumo básico depende de estos ingresos y, cuando no son suficientes, padecen hambre.

Los pobres sufren choques idiosincrásicos (enfermedades, accidentes) y sistémicos (desastres naturales, precios, guerras). Con choques múltiples y frecuentes, sus ingresos no alcanzan para sostener un consumo mínimo, aparecen gastos inesperados, pierden sus activos y pueden incurrir en impagos. Escapar de la pobreza no siempre es sostenible, muchos hogares caen en trampas de pobreza y ésta persiste por generaciones.

Las finanzas son esenciales para los pobres, precisamente porque son pobres. Deben lidiar con emergencias, transformar flujos irregulares de ingresos en consumo estable, aprovechar oportunidades productivas e invertir. Sin acceso a facilidades de depósito, acumulan activos ilíquidos y riesgosos (cabras) como reservas, por precaución y especulación. Sin acceso a préstamos institucionales, descansan en múltiples fuentes informales: parientes, amigos, usureros, comerciantes, proveedores de insumos.

Indispensables para sobrevivir, las finanzas informales tienen limitaciones. Son costosas, riesgosas y no son una buena opción ante eventos sistémicos. La inclusión en mercados financieros institucionales es indispensable.

La inclusión financiera es el resultado de la confluencia entre la oferta de proveedores que satisfacen

los requerimientos de poblaciones vulnerables y la demanda, basada en preferencias temporales, actitudes ante riesgos y capacidad y voluntad de pagar por los servicios.

Barreras diversas (distancia, información imperfecta, incentivos incompatibles, ausencia de instituciones y covarianza) hacen que esta confluencia sea difícil y resulte en exclusión financiera. La inclusión requiere productos que respondan a diversas demandas potenciales, ofrezcan calidad a bajo costo, sean oportunos, confiables y permanentes. La inclusión precisa que los usuarios conozcan la existencia, entiendan términos y condiciones de los servicios y tengan capacidad y voluntad de entrar en transacciones financieras. La educación financiera es esencial para que la oferta de productos y servicios aporte valor, se comprenda y se tomen buenas decisiones financieras.

El desarrollo de productos y la educación financiera deben ser procesos paralelos, ejercicios conjuntos de aprendizaje. La clave es la consistencia. Si los productos deseados no existen, habrá descontento. Si no son apropiados, serán rechazados. Si no son comprensibles, se perderán oportunidades.

Las poblaciones vulnerables son heterogéneas. Cada grupo demanda diferentes productos y requiere diferente velocidad y dirección en la educación financiera. La segmentación es central y debe ajustarse a las circunstancias específicas de cada grupo.

Las instituciones del Grupo de la Fundación Microfinanzas BBVA basan su estrategia en la combinación de productos específicos para cada segmento con educación financiera, como el apoyo a la mujer emprendedora o los programas para pequeños agricultores, enfocados en la sostenibilidad medioambiental y acompañados con formación en las diferentes áreas de un negocio.

El éxito del cliente determina el éxito institucional. Y éste determina el número, variedad y calidad de servicios. El éxito se sustenta en relaciones a largo plazo. La pandemia ha desafiado las relaciones basadas en el contacto personal y ha acelerado la digitalización, y el uso de herramientas como SMS, Whatsapp, redes sociales o aulas virtuales. Sin embargo, estas iniciativas han resaltado la existencia de brechas digitales. Para reducirlas, se ha agregado educación en destrezas digitales a los servicios financieros y no financieros.

Así, el Grupo FMBBVA ofrece servicios financieros adaptados a las circunstancias de clientelas diversas, acompañados de educación financiera, entrenamiento en negocios y destrezas digitales. La nueva normalidad post pandemia demanda este enfoque integrado.

Expertos en inclusión financiera participan en la tercera sesión de EduFin Summit 2021

Modificaciones al régimen de habeas data en Colombia

El pasado 29 de octubre, tras mucho tiempo de estudio y debate que hemos analizado en diferentes números de [Progreso](#), el Congreso de Colombia expidió la Ley 2157 de 2021, también denominada de borrón y cuenta nueva, con el fin de fortalecer el derecho fundamental de Habeas Data. Una norma con la que se crean una serie de beneficios para millones de colombianos que por diversas razones

incumplieron con el pago de sus obligaciones crediticias, creando amnistías siempre y cuando se ponga al día o realice el pago total de la obligación, máximo en un año posterior a la expedición de la norma.

El estado actual del derecho al Hábeas Data en Colombia, particularmente el que se ejerce en torno al dato financiero personal, demanda mayor profundización de las condiciones garantes debido a las situaciones de vulnerabilidad para los titulares de la información almacenada en la base de datos y que han surgido desde la expedición de la Ley 1266 en el año 2008.

Los aspectos más relevantes que se encuentran contemplados en esta nueva norma son:

Comunicaciones Previas al Titular

Frente a este tema, la Ley 1266 de 2008 contempla que, antes de realizar el reporte del dato negativo, las Entidades Financieras deberán enviar una comunicación previa a la última dirección del cliente registrada en su base de datos. Este reporte debe hacerse al menos 20 días calendario después de enviada la comunicación.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de esta ley de borrón y cuenta nueva, se plantea la obligación de las entidades financieras de enviar al deudor no una (como en la generalidad de créditos), sino al menos dos comunicaciones, en días diferentes, antes de ser reportado negativamente cuando el saldo total del crédito al momento de realizar un reporte negativo sea igual o inferior al 15% de 1 SMLMV[1].

Régimen de Amnistía

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva Ley, es el régimen de amnistía. Según la norma, consiste en que las personas que no han pagado las obligaciones reportadas en su historia de crédito y que están en mora, cuentan con un periodo de 12 meses para pagarlas a partir de la entrada en vigor de la norma; esto es, hasta el 29 de octubre de 2022. De esta manera, quienes se acojan a la amnistía reducirán el tiempo de permanencia de su información negativa en las centrales de riesgo, máximo a 6 meses.

Y esto, considerando la regla general que establece esta Ley: los datos que hacen referencia al incumplimiento de obligaciones caducarán cumplido 8 años contados desde el momento en que el deudor entró en mora, transcurridos los cuales, deberán ser eliminados de la base de datos. Es decir, se establece un tope de años para que cualquier persona que tenga reporte negativo salga de las bases de datos por caducidad[2].

Así mismo, este estímulo financiero estipula beneficios de retiro inmediato del dato negativo para ciertos sujetos que paguen sus obligaciones en mora dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley: a) empresas catalogadas como MIPYMES (Micro, pequeña y mediana empresa); b) pequeños productores del sector agropecuario; (c) personas naturales que ejerzan actividades comerciales o independientes, (d) víctimas del conflicto armado y (e) jóvenes y mujeres rurales que tengan cualquier tipo de crédito agropecuario con Finagro.

Otros aspectos relevantes

En materia de personas que aducen ser víctimas de suplantación en el otorgamiento de créditos ante la Entidad Financiera, establece lineamientos precisos sobre el término de respuesta, el cual deberá ser de diez días y realizar durante ese tiempo un reporte que contenga la siguiente leyenda “víctima de falsedad personal” ante las Centrales de Información Financiera.

En ningún caso se podrá consultar la información financiera y crediticia para fines de toma de

decisiones laborales (contratación de personal), y esa información no podrá utilizarse para fines diferentes al análisis o cálculo del riesgo crediticio de las personas.

Cuando por alguna razón, las Peticiones, quejas o reclamos (PQR) que presente un consumidor financiero ante la Entidad financiera sobre Habeas Data, no se contenten en un plazo de quince (15) días hábiles, podrá ser prorrogables por ocho (8) días más.

A través de las páginas web de las Centrales de Información Financiera todas las personas podrán realizar el registro gratuitamente para recibir alertas gratuitas en caso que se reporte ante ellas una nueva obligación a su nombre.

Aquellos créditos que permanezcan sin pago podrán ser reportados hasta por 8 años, contados desde el inicio de la mora.

Las entidades financieras deberán continuar actualizando los reportes ante las Centrales de Información Financiera como mínimo una vez al mes, pero en todo caso el primer reporte negativo deberá hacerse antes de que transcurran 18 meses desde el inicio de la mora de cada crédito a reportar.

La Entidad debe poder demostrar ante las autoridades colombianas, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio o Superintendencia Financiera de Colombia, que ha adoptado las políticas, procedimientos y demás medidas necesarias y adecuadas para darle adecuado cumplimiento a toda la normatividad que rige lo relacionado con el derecho de Habeas Data.

[1] \$136.278 en 2021

[2] No quiere decir que si se acoge a esta Ley no salga antes, ya que si realiza el pago dentro de los 12 meses siguientes a la entrada de vigencia de esta Ley (De octubre 29 de 2021 a octubre 29 de 2022), en 6 meses el reporte negativo saldrá de la base de datos.

Derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB) dictó el pasado 3 de enero, la Circular SB Núm. 001/22 que dispone la implementación de la carta de los derechos y deberes de los usuarios de productos y servicios financieros.

La Circular exige que todas las entidades de intermediación financiera y a los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos, coloquen de manera permanente y visible en sus oficinas principales, sucursales y en los centros de atención al cliente, la citada carta de derechos y deberes, así como su entrega a los clientes desde el inicio de su vinculación.

Asimismo, las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios deberán incorporar la carta en sus portales de internet, en la sección "Protección al Usuario", entregar dicha

carta de manera física a cada cliente que así lo solicite, así como reiterar a los clientes de manera trimestral sus derechos y deberes a través de canales digitales como: app, mail, telefonía móvil (SMS), canales de información al público, y portal web, entre otros.

La Circular estipula que para la divulgación de los derechos y deberes, se pueden utilizar herramientas como bajantes o avisos publicitarios en la web, ventanas emergentes(Pop-up), código QR, etc.

El órgano regulador ha mostrado especial interés en que los usuarios de los servicios financieros estén bien informados respecto a sus derechos y deberes, interés que comparte la banca nacional puesto que impacta positivamente en la salud del sistema financiero nacional y conlleva una mayor satisfacción entre los clientes.

Revelación de información sobre asuntos sociales y ambientales

Con fecha 22 de diciembre, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 031 que imparte instrucciones relativas a la revelación de información sobre asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos (criterios ESG).

En los últimos años, el Gobierno Colombiano, a través de la SFC, reconoce los esfuerzos que vienen realizando los emisores de valores en la adopción de estándares internacionales para la divulgación de información de sostenibilidad a los distintos grupos de interés bajo un enfoque de materialidad ambiental y social.

Por este motivo, y con el propósito de ajustar y mejorar la pertinencia de la información de las prácticas de sostenibilidad para los inversionistas y fortalecer su divulgación por parte de los emisores, la Superintendencia Financiera de Colombia imparte instrucciones a los emisores de valores sobre la revelación de información de asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos, a través de la adopción de los estándares internacionales *Task Force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD, por sus siglas en inglés)* y de los estándares SASB de la *Value Reporting Foundation (VRF, por sus siglas en inglés)*.

Bajo esa óptica, se adicionó un capítulo especial en la Circular Básica Jurídica aplicable a las entidades financieras para definir las reglas aplicables a los emisores en materia de revelación de información sobre los asuntos sociales y ambientales, dentro del informe periódico de fin de ejercicio y el informe periódico trimestral.

Para ello, se incluye la obligación de los emisores de comunicar a través del Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), a más tardar en el año 2024 y conforme a los plazos e instrucciones previstas en la norma, la siguiente información:

El proyecto de capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos.

Dentro del informe periódico de fin de ejercicio, el capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos.

Dentro de los informes periódicos trimestrales, el capítulo dedicado a cualquier cambio material que se haya presentado en las prácticas, procesos, políticas e indicadores implementados en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos.

Diana Mejía, especialista sénior en Inclusión Financiera, CAF

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) es una entidad comprometida con mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos, con acciones que promueven el desarrollo sostenible y la integración de la región. Tiene un modelo de desarrollo sostenible mediante créditos, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado. El aporte sobre el desarrollo de la región se refleja en los resultados de sus operaciones de crédito e inversiones patrimoniales.

Diana Mejía es especialista sénior en Inclusión Financiera en CAF. Con anterioridad trabajó en el Banco de la República (Banco Central de Colombia), donde fue directora de Educación Económica y Financiera y directora de Comunicación Institucional, entre otros cargos. Es Economista y Magíster en Economía por la Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia) y Máster en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard.

Ha trabajado en diversos proyectos de inclusión y educación financiera en América Latina como la medición de las capacidades financieras de la población de varios países de la región, así como asesorías a gobiernos nacionales para el diseño e implementación de estrategias de inclusión y educación financiera. También ha liderado proyectos de innovación, productividad y educación para el trabajo en varios países de América Latina. Ha sido autora de varias publicaciones sobre la materia como los Retos de Implementación de las Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera en América Latina, los Determinantes del Bienestar Financiero en América Latina, los Determinantes de la Educación Financiera en América Latina, la Inclusión Financiera de las Mujeres, entre otros.

Desde CAF, promueven un modelo de desarrollo sostenible mediante créditos y recursos no reembolsables, así como el acceso a servicios básicos que fomentan la calidad de vida de poblaciones vulnerables. ¿Qué papel desempeña la educación financiera en todo ello?

CAF es un banco de desarrollo comprometido con mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos. Nuestras acciones promueven el desarrollo sostenible y la integración de la región. La educación financiera, entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos financieros, es fundamental para el desarrollo de los países, ya que existe una amplia evidencia de que una mayor educación financiera suaviza el funcionamiento de los mercados, en la medida en que las mejores decisiones financieras de los ciudadanos en su conjunto reducen los incidentes de crisis y favorecen la estabilidad del sistema; además, la educación financiera fomenta una política económica sostenible, ya que ciudadanos más educados en temas económicos y financieros están en mayor capacidad de tomar una posición frente a las políticas económicas y sociales que adoptan sus gobiernos. Por su parte, las malas decisiones financieras de los consumidores tienen efectos negativos sobre la economía, tales como bajas tasas de ahorro y de formación de capital, bajos niveles de ahorro para la pensión, y un mayor índice de inequidad en la distribución del ingreso.

Una de las lecciones más relevantes que se puede extraer de las crisis recientes es el desconocimiento y desinformación de gran parte de la población sobre temas básicos en economía y finanzas, lo cual limita su capacidad para tomar decisiones responsables, conscientes y competentes. En esta medida, la educación financiera es crítica para la inclusión, pues no solo facilita el uso efectivo de los productos financieros, sino que también ayuda a que las personas desarrollen las habilidades para comparar y seleccionar aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades y

posibilidades, empoderándolos para ejercer sus derechos y responsabilidades.

Trabajó en el Banco de la República (Banco Central de Colombia) donde, entre otros cargos, fue directora de Educación Económica y Financiera. ¿Cómo se promueve la educación financiera desde una entidad como ésta?

La educación financiera es un tema clave para los bancos centrales y es por esto que la mayoría de estas instituciones en la región lideran la implementación de estrategias nacionales y programas de educación financiera. Muchos bancos centrales se han preocupado por el hecho de que individuos sin los conocimientos financieros básicos carecen de las herramientas para tomar las decisiones más ventajosas para su bienestar económico, afectando tanto conductas de largo plazo como adquirir bienes tangibles, realizar inversiones de capital humano, o ahorrar en fondos de retiro, así como comportamientos relacionados con el manejo diario de los recursos financieros. En el caso de que estas deficiencias sean generalizadas en segmentos importantes de la población, pueden aparecer fricciones que dificultan el funcionamiento óptimo de los mercados. De esta manera, la educación financiera contribuye al bienestar general de la economía y esto es de particular interés para los bancos centrales.

Por estas razones, varios bancos centrales de la región han centrado sus esfuerzos en promover programas de educación financiera para niños y jóvenes con el fin de generar las condiciones, desde la educación formal, para que los futuros adultos cuenten con las herramientas para tomar mejores decisiones financieras que conduzcan a su bienestar.

También ha participado en asesorías a gobiernos nacionales para el diseño e implementación de estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar para que estas estrategias resulten eficaces?

En la última década, un número cada vez mayor de países ha establecido estrategias de inclusión y educación financieras como parte de sus acciones de reducción de la pobreza, con el objetivo de promover la estabilidad y desarrollo de sus sistemas financieros. En muchos casos, estos compromisos han sido plasmados en documentos de política pública de carácter nacional. Conocidas como estrategias nacionales, estas políticas establecen los lineamientos de implementación en diferentes áreas de acción.

En lo que respecta a la inclusión financiera, dichas acciones se concentran en promover el acceso, uso y calidad de servicios y productos financieros; mientras que, en educación financiera, persiguen la implementación de iniciativas o programas que busquen desarrollar las capacidades financieras de grupos poblacionales específicos. Una estrategia nacional puede establecerse como un instrumento eficaz para trazar un camino claro y coordinado hacia la mejora de la inclusión y/o la educación financiera en los contextos nacionales, ya que permite a las partes interesadas definir objetivos comunes, identificar retos y oportunidades relevantes para el logro de estos, y delinear un conjunto prioritario de acciones para ser llevadas a cabo de manera coordinada.

En este sentido, los principales aspectos que se deben considerar para que las estrategias nacionales resulten eficaces se pueden resumir en:

i) contar con líneas base o diagnósticos de los niveles de educación e inclusión financiera para garantizar una implementación efectiva de las estrategias nacionales. El análisis de los datos recopilados también puede ayudar a los formuladores de políticas a comprender mejor los vínculos entre la educación financiera, la inclusión y el contexto socioeconómico específico de cada país, y la aplicación periódica de este tipo de encuestas servirá para realizar evaluaciones de los resultados de los programas y políticas implementadas;

ii) diseñar y mantener a lo largo del tiempo mecanismos efectivos de coordinación en las distintas fases de diseño e implementación de las estrategias nacionales de educación e inclusión financiera, lo

cual es esencial para lograr los objetivos establecidos;

iii) asegurar la asignación de un presupuesto específico, lo cual se puede hacer asignando recursos existentes para la implementación de las estrategias dentro de cada autoridad pública, o agrupando recursos para crear un presupuesto común y redactar un plan de financiamiento específico;

iv) establecer un plan de comunicación que garantice la cooperación con los medios de comunicación nacionales, ya que el uso de medios masivos, como televisión o radio, podría lograr un mayor alcance y conocimiento de las actividades para la población en general, además de una mayor concienciación y sensibilización;

v) realizar un proceso de consulta con las partes interesadas y las poblaciones objetivo para complementar el diagnóstico realizado en la etapa de diseño de la estrategia nacional, con el objeto de contar con un conocimiento profundo de estos grupos y garantizar que el contenido y el formato de los programas de educación financiera, y los productos y servicios financieros dirigidos a ellos, sean adecuados a sus necesidades y capacidades;

vi) establecer desde la fase de diseño un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las estrategias nacionales;

vii) utilizar instrumentos internacionales y de diálogo regional con el fin de fomentar el aprendizaje mutuo y discutir cómo aplicar mejor estos instrumentos diseñados para apoyar la implementación de las estrategias nacionales para la educación e inclusión financiera.

Desde la FMBBVA fomentamos la educación financiera entre nuestros clientes. En concreto, contamos con plataformas virtuales de educación financiera para emprendedores. ¿Cree que la innovación y desarrollo digital ya ha desempeñado su papel o todavía queda mucho por hacer? ¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades en esta materia para una entidad microfinanciera?

Considero que aún queda mucho por hacer. Para lograr una mayor educación financiera digital es necesario atender las posibles barreras que pueden dificultar el uso de estos servicios. En particular, es importante fomentar las capacidades financieras del creciente número de personas en situación de vulnerabilidad que han sido incluidas en el sistema financiero a partir de los programas de transferencias de los gobiernos. En ese sentido, es clave diseñar e implementar programas de educación financiera que incentiven el buen uso de los servicios financieros digitales a la vez que promueven conductas financieras responsables.

Por su parte, los medios digitales se convierten en una excelente oportunidad de mejora para las intervenciones que tratan de promover las capacidades financieras. Mediante el uso de aplicaciones y robo-advisors, estos medios incorporan elementos que han sido reconocidos como exitosos a la hora de promover comportamientos financieros de acuerdo con los hallazgos de la economía conductual —por ejemplo, el uso de elementos lúdicos y personalizados, recordatorios, la posibilidad de establecer metas financieras y el suministro de información cuando se necesita (*teachable moments*)—, además de medir comportamientos financieros y su impacto en el bienestar de los individuos.

Debe darse especial atención a la necesidad de fomentar las capacidades y conocimientos digitales de las poblaciones más vulnerables y que han estado tradicionalmente excluidas del sistema financiero. En este sentido, es importante que las políticas públicas de inclusión financiera contemplen el fortalecimiento de las capacidades digitales. En paralelo, el despliegue de programas de fortalecimiento de capacidades digitales debe segmentarse según las audiencias objetivo: la forma en la que se realicen acercamientos a adultos mayores, poblaciones indígenas o rurales debe responder a métodos personalizados según sus características y condiciones.

Una de las oportunidades más importantes que tienen las microfinancieras en esta coyuntura es

diseñar sus productos y servicios de cara a las necesidades de sus clientes. En este sentido, se recomienda aprovechar esta nueva tendencia digital para realizar una adecuación de los productos y servicios de acuerdo con las necesidades de los usuarios, junto con un acompañamiento continuo en temas de educación financiera y digital.

La FMBBVA está convencida de que un buen sistema de gobierno corporativo exige una estructura organizativa con líneas de responsabilidad bien definidas, basadas en una actuación responsable, coherente y transparente. ¿Qué medidas considera que deberían adoptar los principales agentes económicos de manera prioritaria para hacer realidad estos valores?

Un buen sistema de gobierno corporativo es fundamental para una adecuada implementación de las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. El liderazgo efectivo, así como la participación de todas las partes interesadas relevantes, pueden contribuir a la implementación exitosa de las estrategias nacionales.

Para diseñar e implementar estrategias nacionales que puedan abordar de manera más efectiva y eficiente la necesidad de los ciudadanos y las economías de América Latina y El Caribe, los países de la región deben identificar un coordinador nacional o un secretario técnico de tal naturaleza que permita proteger la implementación de estas estrategias de ciclos políticos o electorales, en la medida de lo posible. De igual manera, es importante identificar mandatos explícitos para las instituciones o autoridades participantes en las distintas áreas de las estrategias: los mandatos pueden ser implícitos e identificados a partir de mandatos existentes, que pueden ir desde la estabilidad financiera hasta la protección del consumidor, u otorgados a través de la legislación primaria.

Los mandatos explícitos facilitan el diseño y la implementación de estrategias nacionales que sean más sostenibles y puedan garantizar una mayor responsabilidad y visibilidad para el público, así como el reconocimiento de todo el gobierno. También pueden facilitar la cooperación interinstitucional con una gama más amplia de autoridades. El liderazgo efectivo y los mandatos legales también pueden aumentar la capacidad de las estrategias nacionales para superar los cambios en el personal al más alto nivel dentro de las instituciones implementadoras.

Se dice que a mayor educación financiera, más ahorro, mejores decisiones de inversión, menores niveles de endeudamiento, mejores pensiones y mayor nivel de vida. ¿Está de acuerdo o no siempre es así?

Estoy de acuerdo. Cada vez tenemos más evidencia a nivel internacional que demuestra que las personas con mayores niveles de educación financiera planean mejor, ahorran más, ganan más en sus inversiones y manejan mejor su dinero para el retiro. Esto tiene implicaciones muy importantes, ya que las personas con mayores conocimientos financieros son más resilientes ante choques económicos, incluyendo situaciones como la crisis generada por la pandemia de covid-19.

Los programas de educación financiera que han probado tener más impacto se centran en generar cambios positivos en el comportamiento financiero de los individuos, lo cual tiene implicaciones importantes en los niveles de salud o bienestar financiero de la población entendido como la medida en que una persona o familia puede gestionar sin problemas sus obligaciones actuales y sentirse segura de su futuro.

Cada vez más, la inclusión y educación financiera son cuestiones que preocupan a los países y son objeto de regulación. ¿Qué mejoras considera que deberían realizarse a nivel normativo?

Para lograr una mayor inclusión financiera digital en la región, es necesario diseñar e implementar un paquete de medidas integrales que incluyan respuestas de política relativas a la oferta y la demanda. Del lado de las políticas sobre la oferta, deben existir marcos regulatorios que promuevan la competencia y eficiencia en el sector de las telecomunicaciones para lograr que los precios de uso de

datos sean asequibles y competitivos. Lo mismo debe suceder con el sector financiero y los distintos actores que ofrecen servicios financieros digitales, ya sea la banca tradicional o empresas fintech, de manera que los precios y comisiones para el uso de estos servicios ofrezcan también competitividad y asequibilidad para toda la población.

Por otra parte, los países de América Latina y El Caribe deben promover marcos regulatorios adecuados para lograr los múltiples objetivos de los formuladores de políticas de inclusión, estabilidad e integridad financieras y protección al consumidor. Esta regulación debe proteger a los consumidores e inversionistas, garantizar una competencia sana y proteger contra los riesgos de estabilidad financiera e integridad. De igual manera, los responsables de la formulación de políticas también deberán considerar enfoques novedosos para garantizar una supervisión y regulación de alta calidad, respaldar el uso seguro de tecnologías innovadoras y, al mismo tiempo, garantizar que la regulación sea proporcional a los riesgos existentes. En este sentido, es importante adaptar los marcos regulatorios con el objeto de que logren el equilibrio adecuado entre permitir la innovación y abordar los desafíos y riesgos para la integridad, la protección del consumidor y la estabilidad financiera.

En particular, el marco regulatorio tradicional (basado en entidades) no es necesariamente un buen enfoque para los modelos de negocios de tecnología financiera. En un entorno que cambia rápidamente, los reguladores deben utilizar cada vez más la regulación basada en actividades. Es clave contar con regulaciones adaptables y flexibles, que reduzcan la probabilidad de que tengan que cambiarse repetidamente para que sigan siendo integrales y adecuadas. De igual manera, los reguladores deben fortalecer sus capacidades institucionales y mantenerse al día con los desarrollos de la industria y la tecnología, así como tener habilidades y herramientas adecuadas para supervisar de manera efectiva la industria de tecnología financiera. A este respecto, los reguladores pueden hacer uso de las nuevas tecnologías mediante el desarrollo de esquemas «suptech» y «regtech».

Por su parte, las políticas de ciberseguridad son fundamentales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital, tales como la privacidad y la propiedad, así como para aumentar la confianza de los ciudadanos en las tecnologías digitales, y que estos puedan sentirse cómodos con su uso. Los ciberataques en la región han ido en aumento, apuntando principalmente a las instituciones financieras de América Latina. Es por esto que los países de la región deben continuar fomentando una mayor cooperación entre ellos, involucrando a todos los actores relevantes y estableciendo mecanismos de monitoreo, análisis y evaluación del impacto relacionados con la ciberseguridad, tanto a nivel nacional como regional. Contar con más datos en relación con el mundo cibernético permitirá introducir la cultura de gestión del riesgo cibernético, que es preciso extender tanto en el sector público como en el privado.

Como miembro del Consejo Asesor del Centro de Educación y Capacidades Financieras de BBVA, que promueve la importancia de los conocimientos y habilidades financieras como elemento clave para mejorar el nivel de salud financiera y contribuir al crecimiento sostenible e inclusivo, ¿cómo cree que puede contribuir la educación financiera a una recuperación sostenible e inclusiva?

Las decisiones de las personas relacionadas con la forma en que se preparan y responden a las circunstancias de la vida, como la actual crisis derivada de la pandemia, también influyen en su salud financiera.

Los hábitos financieramente saludables incluyen pequeños ahorros regulares, control de gastos, gestión de deudas, inversiones prudentes y búsqueda de asesoramiento sólido para protegerse contra las prácticas predatorias y el fraude, así como para aumentar la resiliencia ante choques financieros. La educación financiera y los esfuerzos de desarrollo de capacidades intentan ayudar a las personas a crear hábitos más saludables y evitar errores costosos en la toma de decisiones. De esta forma, la educación financiera puede contribuir de una manera importante a una recuperación sostenible e inclusiva. En este sentido, también es importante que tanto las políticas como los programas de educación financiera incorporen un enfoque de género, teniendo en cuentas las

importantes brechas de género que se observan en conocimientos y comportamientos en América Latina.

Los déficits significativos en la salud financiera apuntan hacia la necesidad de que los sectores público y privado dirijan recursos para desarrollar las capacidades financieras de las personas. El principal desafío es encontrar formas eficaces de hacerlo. La evidencia disponible, incluyendo los estudios que hemos venido adelantando en CAF, muestra que niveles más altos de capacidades están relacionados con un mayor bienestar financiero.

El objetivo central de las estrategias nacionales de educación financiera que incorporen una perspectiva de salud financiera debería ser contar con personas con capacidades financieras, que tengan hábitos financieros saludables y tomen buenas decisiones financieras. Los programas tradicionales de educación financiera asumieron que la difusión de información sobre productos financieros a los consumidores conduciría a mejores opciones. Sin embargo, la evidencia aportada por numerosas evaluaciones de impacto durante la última década sugiere que este supuesto es erróneo.

Un camino más prometedor es el uso de los hallazgos de la economía del comportamiento en el diseño de la educación financiera, haciendo un viraje en el objetivo y las tácticas de esta última, para pasar de centrarse en la transferencia de información y enfocarse en el desarrollo de capacidades, lo que a menudo significa integrar la educación financiera en el proceso de uso de los servicios financieros para promover el aprendizaje a partir de la práctica. Un creciente cuerpo de evidencia muestra que las intervenciones diseñadas utilizando principios de la economía del comportamiento que abordan la toma de decisiones, tienen más probabilidades de mejorar el comportamiento relacionado con el manejo del dinero.

Las decisiones financieras son a menudo complejas, requieren compensaciones e incertidumbres e involucran tanto aspiraciones como temores. Como resultado, las personas a menudo toman decisiones que no reflejan sus mejores intereses. La ciencia del comportamiento busca comprender cómo y por qué los individuos se comportan de una manera específica, cómo procesan la información y cómo el contexto afecta su comportamiento. Las intervenciones basadas en el comportamiento incluyen la integración de instrucciones, valores predeterminados y consejos dentro del proceso de uso de los servicios financieros.

En este orden de ideas, es recomendable utilizar la salud financiera como lente para la vigilancia del sector financiero, especialmente para la protección del consumidor y la educación financiera. En sus políticas de inclusión financiera y protección del consumidor, las autoridades pueden garantizar que los servicios financieros que usan las personas conduzcan a una buena salud financiera y, a través de una educación financiera basada en cambios de comportamiento, pueden respaldar hábitos y decisiones financieramente saludables.

Beneficiarios finales en Colombia

Con el propósito de armonizar la normativa que existe sobre el término “beneficiario efectivo”, la DIAN expidió la Resolución 000164 mediante la cual se reglamentan los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario y así establecer los términos y condiciones que resultan aplicables para el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) y el Sistema de Identificación de Estructuras Sin Personería Jurídica (SIESPJ), considerando las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

A estos efectos, hay que considerar que, antes de la expedición de la Ley 2155 de 2021 (Ley de inversión social, más conocida como la reforma tributaria y comentada en [Progreso 26](#)), la legislación tributaria colombiana establecía dos definiciones diferentes de “beneficiario efectivo” para efectos del envío de información a la Autoridad Tributaria en Colombia (DIAN) y el intercambio de información con dicho organismo. Por tal razón, con la expedición de esta ley, se derogaron dichas definiciones y se establece el concepto de “beneficiario final”, definición que, según la norma citada, deberá entenderse para efectos tributarios como equivalente a beneficiario efectivo o real.

Con esta nueva reglamentación, se regula la noción y criterios de determinación de los Beneficiarios Finales y se indican las personas jurídicas y estructuras sin personalidad jurídica o similares obligados al Registro de Beneficiarios Finales (RUB), los responsables de esta obligación formal de realizar el registro en la plataforma, sus excepciones y sanciones aplicables. Esta obligación entró en vigor el 15 de enero de 2022 y se tendrá esta como la fecha de implementación del registro en línea a través del Sistema Informático Electrónico (SIE) de la DIAN.

Para los fines anteriores, se debe considerar que las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares constituidas o creadas antes del 15 de enero de 2022, deberán diligenciar el RUB antes del 30 de septiembre de 2022 y aquellas empresas constituidas o creadas después del 15 de enero de 2022, tendrán un plazo de 2 meses siguientes al registro en el Registro Único Tributario (RUT) para diligenciar el RUB.

Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción

El pasado día 18 de enero la Presidencia de Colombia promulgó la Ley 2195 mediante la que se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción

Tratar el tema de la corrupción implica hablar de políticas construidas idealmente sobre la prevalencia del interés general y de la protección a la moralidad administrativa, y en particular en Colombia, país que se ha visto sacudido por numerosos casos de corrupción. Una situación que, progresivamente, pone en riesgo la viabilidad del país.

Ante este escenario, la Ley 2195 se publica con el propósito de brindar herramientas que contribuyan a mejorar la situación de Colombia mediante la adopción de disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar, promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.

Con la ejecución de esta Ley, es posible interceder en el momento en que una persona jurídica promueva o se encuentre en un estado de insolvencia que ponga en riesgo el patrimonio público que esté afectado, especialmente si se generó por explotación o apropiación de bienes para el beneficio de terceros.

Entre los aspectos más destacados que contempla esta nueva normativa, se encuentran los siguientes:

Las personas jurídicas sujetas a inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades de Colombia adoptarán programas de transparencia y ética empresarial que incluyan normas internas de auditoría.

Las entidades obligadas a implementar SARLAFT o de reportar al Registro Único de Beneficiarios Finales, deberán aplicar nuevas medidas de debida diligencia para la identificación de los beneficiarios finales.

Se establece un nuevo régimen de principios generales contractuales para las entidades no sometidas al estatuto general de contratación del Estado.

Se establece un nuevo régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria para personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios, empresas de economía mixta y entidades sin ánimo de lucro. Estas sanciones podrán ser aplicadas por las Superintendencias o entidades de supervisión.

Se otorgan facultades a la Contraloría General de la Nación para procedimientos de búsqueda, embargo y recuperación de activos en el exterior. También se posibilita la desestimación de la personalidad jurídica para efectos de control fiscal (lo que comúnmente se denomina levantamiento del velo corporativo).

Se realizan modificaciones a la acción de repetición en relación con el dolo, la culpa grave, la legitimación, la caducidad, la oportunidad para presentar la demanda y el llamamiento en garantía, entre otras.

Consulta [aquí](#) la Ley.

Publicidad sobre criptoactivos

El pasado 17 de enero se publicó la Circular 1 /2022 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión, que constituye la primera norma a nivel nacional y europeo en regular la publicidad de este tipo de activos.

Antecedentes

En los últimos años, las revalorizaciones de algunos criptoactivos han aumentado su atractivo como inversión, favorecido por las campañas publicitarias que han podido incitar a invertir en estos nuevos activos sin disponer de información suficiente sobre sus características y los riesgos que conllevan.

Por ello, la CNMV y el Banco de España en diversos comunicados[1] han ido alertando sobre los riesgos que los criptoactivos suponen para los participantes del sistema financiero y, en concreto, para los pequeños inversores: complejidad, volatilidad y potencial falta de liquidez. En este contexto, y considerando las competencias[2] otorgadas a la CNMV respecto al control de la publicidad de criptoactivos y otros activos objeto de inversión que no se regulan en la Ley del Mercado de Valores, la CNMV ha emitido esta Circular.

Definiciones

La Circular contiene definiciones de conceptos como “Actividad Publicitaria”, “Campaña publicitaria”, “Campaña publicitaria masiva”, “Pieza publicitaria”, “Criptoactivo”, “Proveedor de servicios sobre criptoactivos”, “Comunicación comercial” o “Servicios sobre criptoactivos”, entre otros.

La “Actividad publicitaria”, se define ampliamente puesto que abarca toda forma de publicidad, independientemente de los medios de comunicación, soportes y formatos publicitarios utilizados; y una campaña publicitaria se considera masiva cuando va dirigida a más de 100.000 personas, independientemente del medio publicitario utilizado y de acuerdo con unos criterios de medición contemplados en la Circular.

Ámbito objetivo de aplicación

La actividad publicitaria queda sujeta a lo previsto en la Circular sobre criptoactivos que sean objeto de inversión, considerando, a estos efectos, toda publicidad dirigida a inversores o potenciales inversores en España en la que se ofrezcan o se llame la atención, de forma implícita o explícita, sobre criptoactivos como objeto de inversión[3].

La norma contiene además, una lista de las actividades que no son consideradas actividades publicitarias y por tanto quedan fuera del ámbito de aplicación de la Circular. Entre ellas: documentación explicativa de una emisión (“White Papers”), publicaciones sobre criptoactivos de analistas financieros no patrocinados, publicidad sobre criptoactivos que tengan la consideración de instrumento financiero, publicidad de criptoactivos que no sean objeto de inversión, campañas publicitarias corporativas, o “tokens” no fungibles, entre otros.

Ámbito subjetivo de aplicación

La Circular será de aplicación a: i) los proveedores de servicios de criptoactivos cuando realicen actividades publicitarias sobre los mismos, ii) los proveedores de servicios publicitarios y, iii) toda persona física o jurídica, diferente de las anteriores, que realice por iniciativa propia o por cuenta de terceros una actividad publicitaria sobre criptoactivos.

Contenido y formato del mensaje publicitario

La Circular contiene un Anexo en el que se establecen los criterios generales a cumplir por toda publicidad. Entre ellos, y a título ejemplificativo: la información habrá de ser clara, equilibrada, imparcial, coherente y no engañosa; si se facilita información sobre el coste o rentabilidad de un criptoactivo, deberá ser clara, suficiente y actualizada; o se deberá evitar hacer referencia a altas rentabilidades pasadas.

Adicionalmente, se exige que toda comunicación comercial deberá incluir:

-En una posición relevante y claramente visible para los inversores, el siguiente mensaje: “La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido”.

-Un enlace o la ubicación de la información adicional que contenga los riesgos que resulten de aplicación con el siguiente texto: “Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación”.

Otras consideraciones

La Circular exige a los sujetos obligados la llevanza de un registro de información y documentación sobre sus campañas publicitarias en curso y las realizadas en los últimos dos años.

Además, establece un régimen de comunicación previa obligatoria para campañas de publicidad masiva, de manera que se deberá aportar a la CNMV, al menos 10 días hábiles antes de su ejecución, un documento de comunicación previa que se adaptará al modelo recogido en la web de la CNMV.

[1] La CNMV y el BE publicaron el 9 de febrero de 2021 un comunicado conjunto, que se suma a otro de 2018,

[2] El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, introdujo un nuevo artículo 240 bis en la Ley del Mercado de Valores (LMV) para reforzar el marco legal de protección de los iudadanos e inversores en lo relativo a la publicidad de nuevos instrumentos activos financieros en el ámbito digital otorgando a la CNMV competencias con el fin de sujetar a control administrativo la publicidad de criptoactivos y otros activos e instrumentos que no se regulan en la LMV y que se ofrecen como propuesta de inversión.

[3] En todo caso, se presume que un criptoactivo se ofrece o se llama la atención sobre él como posible objeto de inversión cuando se promueva su adquisición o se haga cualquier referencia a su rentabilidad, precio o valor, actuales o futuros, que pudiera sugerir una oportunidad de invertir en dicho criptoactivo. Se presumirá asimismo que una actividad publicitaria va dirigida a inversores en España cuando se realice mediante medios físicos en España.

Transparencia y protección a la clientela

El pasado 25 de noviembre el Banco de España emitió la Circular 4/2021 sobre modelos de estados reservados en materia de conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela, y sobre el registro de reclamaciones.

Esta norma fija el contenido y la periodicidad de los modelos de estados reservados en materia de conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela que las entidades obligadas deben remitir al Banco de España y se determina asimismo el contenido mínimo de la información que dichas entidades deberán tener a disposición del Banco de España en materia de reclamaciones.

Objeto y contenido de la Circular

Tal y como se desprende de la norma, su publicación es consecuencia de la necesidad de contar con un marco específico de información reservada en materia de conducta, que procure información adecuada y suficiente para el correcto desarrollo de la función de supervisión del Banco de España, en relación con el cumplimiento de las normas de conducta, transparencia y protección a la clientela. Algo especialmente relevante considerando el proceso de innovación que experimenta el mercado de productos y servicios bancarios.

La Circular consta de ocho normas, una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición final, incluyendo además dos anejos: el primero establece los modelos de estados

reservados en materia de conducta que las entidades deben enviar al Banco de España y el segundo define el contenido mínimo de información en materia de reclamaciones que deberá estar a disposición del supervisor.

Ámbito de aplicación

La Circular es de aplicación a las siguientes entidades:

Las entidades de crédito, excluido el Instituto de Crédito Oficial.

Los establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, incluidos aquellos que tengan carácter híbrido.

Las entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018[1].

Las entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas.

Los titulares de establecimientos de compra y venta de moneda extranjera.

Los prestamistas inmobiliarios e intermediarios de crédito inmobiliario sometidos a la supervisión del Banco de España.

Las sucursales en España de las entidades de crédito y de las entidades de pago y entidades de dinero electrónico que estén autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer Estado.

Estados reservados en materia de conducta

La regla general respecto a los criterios contables para la elaboración de los estados reservados en materia de conducta, incluidas las normas de reconocimiento y de valoración, es que serán aplicables aquellos que según la normativa contable resulte de aplicación a cada entidad.

Esta información deberá remitirse en los cinco primeros días naturales del tercer mes siguiente a la finalización del correspondiente período de declaración semestral que coincidirá con el semestre natural y la información que se solicitará a través de estos estados se estructurará en tres bloques principales:

Tipología de productos y servicios bancarios

Comisiones e ingresos por intereses

Reclamaciones (recibidas y resueltas)

Dada la diversidad de los tipos de entidades a las que se dirige la Circular, así como las diferencias en su tamaño y la tipología de clientes a los que prestan servicios, la norma prevé un régimen simplificado de los requerimientos de estados reservados en materia de conducta, incorporando así el principio de proporcionalidad en la norma.

Registro de reclamaciones

La segunda cuestión que regula la norma es el registro de reclamaciones que las entidades deberán llevar para recoger las reclamaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero con los datos que se solicitan en el anejo 2 de la Circular.

Según este precepto, las entidades de crédito, las entidades aseguradoras y las empresas de servicios de inversión están obligadas a atender y resolver las quejas y reclamaciones que los usuarios de servicios financieros puedan presentar, relacionados con sus intereses y derechos legalmente reconocidos.

Así, estos datos podrán ser facilitados al Banco de España cuando sean requeridos y deberán estar disponibles hasta seis años después de la fecha de presentación de la reclamación.

Entrada en vigor

La Circular entró en vigor el 21 de diciembre de 2021 con las siguientes salvedades:

Los primeros estados reservados en materia de conducta que se han de presentar al Banco de España serán los correspondientes al segundo semestre de 2022.

Las entidades tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para completar el registro de reclamaciones.

Consulta [aquí](#) la Circular.

Transparencia fiscal y prevención de blanqueo de capitales

El pasado mes de noviembre se publicó la Ley 254 para modificar diversas normas en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre las normas modificadas y las novedades introducidas destacan los siguientes aspectos:

Ley 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

a) Definiciones. La norma introduce dos nuevas definiciones: *beneficiario final* y estructura jurídica. Respecto a la primera, define al beneficiario final como a la persona natural que de manera directa o indirecta, ejerza un control significativo sobre el cliente, la relación de cuenta, contractual y/o de negocio, o la persona o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realice la transacción. En cuanto a la *estructura jurídica*, se referirá a fideicomisos u otras relaciones legales en las que exista una separación entre la propiedad legal y el beneficiario final o beneficiarios finales.

b) Unidad de Análisis Financiero. Se adicionan facultades para la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en cuanto al análisis de la información y envío de documentos, así como el deber de asistir para ayudar a las investigaciones penales.

c) Sujetos obligados financieros y no financieros. Según dispone la norma, las organizaciones autorreguladas, casa de valores, administraciones de inversión, administradoras de fondos de pensiones y administradoras de fondo de cesantía; sociedades de inversión auto administradas;

asesores de inversión; y proveedor del servicio administrativo del mercado de valores, consideradas sujetos obligados financieros, serán supervisados por la Superintendencia de Valores de Mercado. Por otro lado, serán sujetos obligados no financieros los supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, definidos en el artículo 40 de la Ley 124 de 2020. Estos sujetos obligados deberán documentar sus evaluaciones de riesgo, considerar todos los factores de riesgos relevantes para determinar el nivel de riesgo y sus mitigadores, mantener actualizadas sus evaluaciones de riesgos, así como mantener mecanismos apropiados para poder proveer a sus supervisores, la información sobre las evaluaciones de riesgo.

d) Con esta modificación se aumentan las sanciones genéricas: multas de B/. 5,000 a B/. 5.000.000. Además, introduce cambios al artículo 61 de la Ley 23 de 2015 que establece sanciones específicas.

Ley 51 de 2016 que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales

En relación a las modificaciones del artículo 4 de la Ley 51 de 2016, se establece que en todos aquellos casos no previstos en la norma con respecto a cada cuenta reportable, la institución financiera panameña sujeta a reportar, deberá enviar a la autoridad competente el balance o valor de la cuenta, incluyendo el valor en efectivo o el valor de cancelación al final del año, en todos aquellos casos de contratos de seguros con valor en efectivo o de renta vitalicia.

Asimismo se elevan las multas estipuladas en el artículo 22 de la Ley 51 de 2016, estableciendo sanciones de B/.5,000 hasta B/.100,000, cuando la persona natural o persona jurídica incumpla con entregar la información y documentación requerida por causas imputables a ésta, dentro del plazo otorgado.

También se modifican las sanciones del artículo 23 de la Ley 51 de 2016, estableciendo multas de B/.5,000 a B/.50,000 al cuentahabiente que proporcione a la institución financiera una certificación que contenga información falsa.

Modificaciones a Ley 52 de 2016 que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas

Se contempla la obligatoriedad de llevar registro contables y documentación de respaldo para toda persona jurídica que no realice operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos dentro de la República de Panamá, así como aquellas que se dediquen únicamente a ser tenedoras de activos, dentro y fuera de Panamá.

Al 30 de abril de cada año, las personas jurídicas deberán proporcionar al agente residente los registros contables o la copia de los registros contables relativos al periodo fiscal, que haya culminado el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Si los registros se mantienen en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, anualmente, deberán informar por escrito al agente residente el nombre y datos de la persona de contacto, así como la dirección física donde se mantienen los registros. Deberán también informar y suministrar al agente residente la información requerida por los reguladores, así como los cambios en la persona que custodia los registros.

Tal y como dispone esta nueva modificación, ante un cambio de agente residente, la persona jurídica deberá facilitar al nuevo agente residente todos los registros contables y documentación de respaldo,

antes de que sea inscrita su designación en el Registro Público de Panamá. Sólo se inscribirán las escrituras públicas donde conste la declaración expresa de esta entrega. Si se disolviera la personería jurídica, el agente residente deberá custodiar los registros contables y sus respaldos, por un periodo de 5 años desde la fecha de la disolución.

Por otro lado, se establece la obligatoriedad del agente residente de reportar al 15 de julio de cada año, una declaración jurada que contenga una lista de las personas jurídicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente, incluyendo el nombre y número de RUC (Registro Único Contribuyente).

Por último y al igual que en el resto de normas modificadas, también se aumentan notablemente las sanciones previstas.

Ley 124 de 2020 que crea la superintendencia de sujetos no financieros

Entre las modificaciones a la norma, se encuentra el otorgamiento de nuevas facultades a la Superintendencia de Sujetos no Financieros, se establece un quórum válido para la toma de decisiones y nuevos miembros de la Junta Directiva, de entre los cuales, dos de ellos deberán formar parte del sector público.

Además, a efectos de confidencialidad y reserva de la información, la norma establece que toda documentación contenida en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas se registrará por lo dispuesto en la Ley 129 de 2020.

Ley 129 de 2020 que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas

La norma establece modificaciones a la Ley 129 de 2020, mediante la cual se crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Dentro de los cambios realizados a la norma destacan la reducción de los términos para el envío de información y el aumento en las sanciones genéricas.

Modificaciones al Código Fiscal

Finalmente la norma modifica diversos preceptos del Código Fiscal en el que se tipifican las sanciones a: (i) organismo de administración, accionistas, socios, o interesados en la personería jurídica que fue suspendida por cualquier incumplimiento establecido en las leyes aplicables, (ii) a los funcionarios públicos, personas naturales o jurídicas que incumplan con la presentación de informes a la autoridad fiscal competente, (iii) a los funcionarios o particulares que incumplan disposiciones referentes a la expedición de paz y salvos, y (iv) a las entidades que deban presentar el Reporte País por País, relacionado al grupo de empresas multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750.000.000 euros, que presenten incumplimientos con la información a reportarse en su período fiscal.

Ley que regula el servicio de extensión agropecuaria

En diciembre de 2021 se promulgó la Ley N° 31368 que regula el servicio de extensión agropecuaria, para incrementar la productividad y competitividad del productor agropecuario peruano, así como impulsar el desarrollo rural.

La finalidad de esta norma es la promoción y el incremento de las capacidades de los productores agrarios para lograr su productividad y competitividad a través del servicio de extensión agropecuaria.

Concepto de “Servicio de extensión agropecuaria”

Se entiende por servicio de extensión agropecuaria el servicio de carácter público, permanente y descentralizado que implica un proceso educativo, sistemático y de interacción y acompañamiento con los productores agropecuarios.

Este servicio permite atender demandas integrales que incluyen la capacitación y asistencia técnica con el fin de facilitar la aplicación de tecnologías y conocimientos que mejoren los procesos de producción de las unidades agropecuarias y agroforestales. Además, este servicio incorpora innovaciones tecnológicas, organizativas y ambientales, considerando el entorno sociocultural de los productores agropecuarios y potencialidad del suelo y la disponibilidad hídrica.

Proveedores y usuarios del servicio

Este servicio solo puede ser brindado por proveedores que cumplan con los requisitos, condiciones y demás aspectos que se establezcan en el reglamento de la norma, así como estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Servicio de Extensión Agropecuaria (RNPSEA), cuya administración e implementación progresiva está a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria.

Por su parte, los usuarios de dicho servicio serán las personas naturales, jurídicas y organizaciones que se dediquen principalmente a la actividad agrícola y/o pecuaria y que accedan de manera voluntaria a recibir el servicio de extensión. Asimismo, serán las instituciones educativas que desarrollan actividades de enseñanza relacionadas a la actividad agropecuaria.

Objetivos específicos del servicio de extensión agropecuaria

La Ley norma establece además, los objetivos específicos del servicio de extensión agropecuaria:

Fortalecimiento y ampliación de la cobertura del servicio de extensión agropecuaria en atención a las necesidades y demandas de los productores agrarios.

Incremento y fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector agropecuario.

Promoción del uso de tecnologías sostenibles en la actividad agropecuaria.

Fortalecimiento de la articulación de los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), que participan en la prestación del servicio de extensión agropecuaria.

Fomento de la transferencia tecnológica y la asistencia técnica a nivel nacional.

Otras consideraciones

La norma regula también, las competencias y mecanismos de articulación de las entidades de los tres niveles de gobierno (central, regional y local), que participan en la prestación del servicio de extensión agropecuaria, considerando el potencial agrario y la demanda de los productores y las tendencias de los mercados nacional e internacional. Asimismo, se dispone que la autoridad competente, Instituto Nacional de Innovación Agraria, debe desarrollar extensión en sistemas agroforestales, y silvicultura con el fin de lograr la promoción de las actividades agroforestales y agrosilvopastoriles a nivel nacional.

Finalmente, se dispone que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego emitirá el reglamento correspondiente en un plazo no mayor de ciento veinte días calendario contados desde la entrada en vigor de la norma.

Pago de facturas Mype a treinta días

El pasado mes de noviembre se promulgó la Ley N° 31362 de pago de facturas Mype a treinta días, cuyo objeto es regular el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios girados a empresas del sector privado y el sector público a fin de impulsar el dinamismo de la economía a través de la oportuna provisión de liquidez (capital de trabajo) a las micro y pequeñas empresa (MYPE).

Una de las medidas que durante la coyuntura generada por la COVID-19 el Estado peruano ha establecido con el fin de reactivar la economía y, especialmente, la del sector MYPE; un colectivo de vital importancia en la economía peruana y que se ha visto muy afectado durante esta pandemia.

Entre los aspectos más relevantes regulados en la Ley, destacan:

Calificación de MYPE

En primer lugar, la norma establece los criterios según los cuales las empresas serán calificadas como MYPE. A estos efectos, en función de sus niveles de ventas anuales, dispone:

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)[1].

Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT.

Emisión y aceptación de la factura

En lo que al proceso para la emisión y aceptación de la factura y recibo por honorarios se refiere, la Ley dispone que la empresa adquirente del bien o servicio tendrá un plazo de ocho (8) días calendario contados a partir de la recepción del bien o servicio, para otorgar por escrito la conformidad; y una vez que se dé esta conformidad, el proveedor emitirá la factura o recibo por honorarios correspondiente.

Plazo de las facturas

El punto más relevante de la norma es el establecimiento de un plazo para el pago de las facturas o recibos por honorarios: el pago del monto total deberá ser cancelado de forma efectiva en un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión, en caso sea pago en cuotas, se debe establecer las respectivas fechas considerando que la primera cuota se paga como máximo dentro de los treinta (30) días calendario a la presentación de la factura o recibo por honorarios. Cabe precisar que la norma habilita que las partes puedan establecer, de común acuerdo, un plazo distinto, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurren en él y no constituya abuso para el proveedor de bienes o servicios.

Otro aspecto importante es que ante el incumplimiento del pago en los plazos establecidos, se incurrirá en mora devengándose intereses moratorios desde el día siguiente de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. La tasa de interés moratoria será calculada de acuerdo con los criterios establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú.

Periodo transitorio y reglamentación

Finalmente, se reconoce un plazo de adaptación de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley. Así, el pago del monto de las facturas o recibos por honorarios en el caso de las empresas privadas, se podrá realizar en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario. Asimismo, se exige la aprobación del reglamento correspondiente en el plazo máximo de noventa (90) días.

[1] La UIT correspondiente al año 2022 asciende a S/ 4,600.00

Regulación de bancos digitales para profundizar la inclusión financiera

En años recientes, los llamados bancos digitales [1] han proliferado por doquier. Estos modelos han adoptado nuevas tecnologías para ofrecer servicios financieros a escala de manera innovadora, con capacidades analíticas avanzadas y menor costo operativo, y tienen el potencial de ofrecer servicios más asequibles y adecuados a la población excluida o subatendida por el sistema financiero tradicional. La manera en que deben ser regulados se ha convertido en un tema de gran interés y fuente de continuos debates entre reguladores en todos los mercados.

A través de una investigación amplia sobre bancos digitales a nivel internacional, CGAP [2] publicó el reporte *Bancos digitales: ¿Cómo pueden ser regulados para profundizar la inclusión financiera?* [3] a finales de 2021, que describe tres enfoques regulatorios para bancos digitales que han dado cabida a nuevos modelos de negocio con mayor potencial de inclusión. Los enfoques incluyen (i) un régimen de licencia especial para bancos

digitales, (ii) un régimen de autorización escalonada o por etapas, exclusivo o no para bancos digitales y (iii) un enfoque sin un régimen especial ni escalonado para bancos digitales.

Aunque no de manera exhaustiva, el reporte detalla varios ejemplos relevantes en cada categoría que incluyen la definición local de dichos modelos, sus objetivos de política y población objetivo, su distribución y puntos de contacto físicos, las actividades permitidas y requerimientos de capital, así como la respuesta del mercado a dichos regímenes y el grado en el cual favorecen la inclusión financiera. La mayoría de los ejemplos proviene de mercados desarrollados o emergentes con niveles de inclusión financiera más altos que las economías en desarrollo, porque es donde mayoritariamente han aparecido modelos de bancos digitales a la fecha.

Los países que han emitido licencias especiales para bancos digitales son pocos e incluyen a Corea, Filipinas y Pakistán, entre otros. Malasia y Singapur requieren que todos los solicitantes de bancos digitales pasen por una fase restringida antes de convertirse en un banco digital pleno, mientras que en el Reino Unido y Australia todos los bancos pueden pasar por una fase restringida opcional, sin importar si son bancos tradicionales o digitales. Sin embargo, la mayoría de los países ha optado por no crear ninguna categoría regulatoria especial para dichos bancos, como es el caso de Brasil, Alemania y Sudáfrica que albergan bancos digitales con un número considerable de clientes.

El reporte mantiene un enfoque en cómo aprovechar el potencial de los bancos digitales para atraer competencia, innovación y modernización al sector bancario y promover la inclusión financiera. Está dirigido principalmente a las autoridades regulatorias, especialmente en mercados emergentes y economías en desarrollo, con el objetivo de ayudarles a tomar decisiones mejor informadas sobre cuál podría ser la forma adecuada para regular a los bancos digitales en su país.

Consulta el documento completo (en inglés) [aquí](#).

[1] “Banco digital” se define como un proveedor de servicios financieros con licencia bancaria que adopta nuevas tecnologías en todas sus operaciones (*back office* y *front office*) para ofrecer productos y servicios bancarios principalmente a través de canales digitales. Esta definición excluye a “neobancos”, “challenger banks” u otras fintechs que no cuentan con licencia bancaria propiamente.

[2] CGAP es un *think tank* enfocado en probar, aprender y desarrollar soluciones innovadoras a través de la investigación práctica y el compromiso activo con sus socios en la construcción de sistemas financieros responsables e inclusivos que ayuden a las personas a salir de la pobreza, proteger sus ganancias y promover los objetivos de desarrollo global. Ubicado en el Banco Mundial, cuenta con el apoyo de más de 30 organizaciones de desarrollo líderes comprometidas con lograr que los servicios financieros satisfagan las necesidades de las personas de bajos ingresos. Para más información visite: <https://cgap.org>.

[3] Digital Banks: How can they be regulated to deepen financial inclusion?” Slide Deck. Washington, D.C.: CGAP

Sostenibilidad y gobierno corporativo en la Memoria Anual

El pasado 12 de noviembre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la Norma de Carácter General (NCG) 461 que modifica el contenido de las memorias anuales que deben elaborar y remitir las entidades supervisadas a la CMF, incorporando el deber de informar sobre temas de sostenibilidad y gobierno corporativo.

Esta nueva norma modifica la NCG N°30 en lo referente al contenido de las memorias anuales, contemplando temáticas de sostenibilidad de manera integral a lo largo de ese reporte, y respondiendo, de esta manera, a los estándares que se han ido adoptando a nivel internacional y a las exigencias actuales de los inversionistas.

Aspectos principales sobre los que reportar

La norma, que deroga la antigua NCG N°385, exige a las entidades supervisadas por la CMF que reporten sus políticas, prácticas y metas adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza (ASG o ESG por sus siglas en inglés) y entre los aspectos más novedosos, destacan los siguientes:

Índice de contenidos: se debe incluir el índice de contenidos haciendo referencia a los estándares internacionales de reporte que haya tomado como referencia la entidad.

Perfil de la entidad: tal y como exige la norma, son diversos los aspectos sobre los que hay que informar. Entre ellos:

Misión, visión, propósito y valores corporativos de la entidad. En concreto, debe señalarse si se adhiere o no a los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresas emanados de las Naciones Unidas, u otro estándar equivalente.

Información histórica: se deberá realizar una descripción de la historia de la entidad desde su constitución a la fecha.

Propiedad: situación de control y cambios importantes respecto al mismo, identificación de socios o accionistas mayoritarios, tipos de acciones y sus características, política de dividendos y transacciones en bolsas, entre otros.

Gobierno corporativo: el informe deberá incluir un marco de gobernanza en el que se defina la estructura y funcionamiento del gobierno corporativo de la entidad, haciendo referencia a la adopción de buenas prácticas.

Respecto del Directorio u órgano de administración equivalente, se deberá reportar la identificación de cada uno de sus integrantes, señalando la fecha de su nombramiento, los ingresos de sus miembros con ocasión de sus labores en el Directorio y la periodicidad con la cual se informa de los asuntos relacionados con las materias ambientales y sociales.

Por otro lado, deberá indicarse si el Directorio evalúa regularmente su desempeño colectivo y/o individual, además del de sus Comités, señalando la periodicidad con la que se realiza.

También será objeto de reporte la información relativa a los Comités de directorio, los ejecutivos principales, la adherencia a códigos nacionales o internacionales, o las políticas de gestión de riesgos, entre otros.

Estrategia: se deberán indicar los horizontes temporales a corto, medio y largo plazo relevantes para la entidad, considerando la vida útil de sus activos o infraestructura de la misma, los objetivos estratégicos y los planes de inversión.

Personas: la Memoria incluirá información sobre la dotación de personal, debiendo informar sobre la diversidad de la plantilla, indicando número de personas por sexo, nacionalidad, rango de edad o discapacidad. Además se deberá reportar sobre políticas de equidad que adopta la entidad, informando la brecha salarial anual por sexo y las políticas para prevenir y gestionar el acoso laboral y sexual en el marco laboral.

Modelos de negocio: se describirá el o los sectores industriales económicos en los cuales se desarrollan las actividades de la entidad, tipos de negocio desarrollados, grupos de interés, instalaciones de la entidad, información sobre entidades subsidiarias o asociadas, e inversión en otras entidades.

Proveedores: las entidades deberán incluir un apartado dedicado a la gestión de proveedores en el que se informe sobre las políticas de pago y las evaluaciones que se realizan a los mismos.

Indicadores: la memoria contendrá información sobre el cumplimiento legal y normativo respecto a clientes, trabajadores, requerimientos medioambientales y cuestiones de libre competencia. Adicionalmente, deberá reportar las métricas en materia de sostenibilidad que resulten materiales para la entidad de acuerdo con su sector industrial, A estos efectos, se estará a la clasificación de industrias *Sustainable Industry Classification System (SICS)* que a juicio del directorio u órgano de administración resulte más pertinente, y a la definición de métricas *Sustainability Accounting Standards* establecidas por el *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*.

Hechos relevantes: las entidades deberán adjuntar un resumen de los hechos esenciales o relevantes divulgados por la entidad durante el período anual, indicando los efectos que ellos han tenido o puedan tener en la marcha de la entidad, en sus valores o en la oferta de ellos.

Comentarios de accionistas y del comité de directores: deberá incluirse una síntesis fiel de los comentarios y proposiciones relativas a la marcha de los negocios sociales, formuladas por accionistas y por el Comité de Directores y en caso de no existir, deberá señalarlo expresamente.

Informes financieros: se deberá señalar la disponibilidad de los estados financieros de la entidad en el sitio en Internet de la CMF y en el de la propia entidad, en caso de tenerlo, indicando las URLs de ambos.

Entrada en vigor

La norma comenzará a regir para las memorias anuales de los ejercicios de los años 2022, 2023 o 2024, dependiendo del monto total de activos de cada entidad y de la naturaleza jurídica de las mismas, sin perjuicio de la posibilidad de las compañías de adaptar sus memorias anuales a las nuevas exigencias voluntariamente con anterioridad a las fechas señaladas:

A partir del 31 de diciembre de 2022: para las sociedades anónimas abiertas que superen el equivalente a 20 millones de Unidades Financieras (UF) en activos totales consolidados calculados a la fecha de inicio del ejercicio al que se refiere la memoria.

A partir del 31 de diciembre de 2023: para las sociedades anónimas abiertas que superen el equivalente a 1 millón de UF en activos totales consolidados calculados a la fecha de inicio del ejercicio al que se refiere la memoria.

A partir del 31 de diciembre de 2024: para las entidades no contempladas en los casos anteriores, como sociedades anónimas especiales inscritas en el Registro de Valores como bancos, compañías de seguros, entidades de infraestructura y administradoras generales de fondos.

Protección a consumidores y usuarios

Durante los dos últimos meses la protección al consumidor ha sido una de las preocupaciones de las autoridades chilenas. Así, el pasado 24 de diciembre se publicó la Ley 21.398 que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los Consumidores, y a finales de enero el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) aprobó mediante la Resolución nº 33, la Circular Interpretativa sobre protección de los consumidores frente al uso de sistemas de inteligencia artificial en las relaciones de consumo.

a. Ley 21.398

Tal y como se llevó a cabo con el Reglamento de Comercio Electrónico comentado en [Progreso 26](#), esta norma introduce diversas modificaciones a la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Entre ellas, destacan:

Principio pro consumidor

Se establece el principio pro consumidor, según el cual, las normas de la Ley de Protección al consumidor se interpretarán siempre en favor de los consumidores. (Nuevo artículo 2 ter de la 19.496).

Nuevos derechos

La Ley reconoce como derechos de todo consumidor, junto con los previstos en la Ley 19.496, aquellos consagrados en leyes, reglamentos y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de sus derechos e incorpora además, nuevos derechos en calidad de básicos respecto al Consumidor de Productos y servicios financieros. Entre ellos:

-Acudir siempre ante el tribunal competente conforme se dispone en la Ley, debiendo el proveedor informar de este derecho al celebrar el contrato y en el momento de surgir cualquier controversia, queja o reclamación.

-Elección, por parte del consumidor, de métodos alternativos de resolución de conflictos (mediación, conciliación o arbitraje) y gratuitos. Asimismo, permite a los proveedores financieros y no financieros la adscripción y ofrecimiento del Sistema de Solución de Controversias.

-Se reconocen como básicos los demás derechos establecidos en las leyes referidas a derechos de los consumidores, en especial, aquéllos consagrados en la ley N°18.010, que establece normas para las operaciones de crédito.

Normas de equidad de los contratos de adhesión

La norma introduce diversas modificaciones relativas a las normas de equidad en las estipulaciones y

en el cumplimiento de los contratos de adhesión:

- Las cláusulas que limiten los medios a través de los cuales los consumidores puedan ejercer sus derechos no producirán efectos en los contratos de adhesión.
- Las cláusulas ambiguas de los contratos de adhesión se interpretarán en favor del consumidor, y cuando existan cláusulas contradictorias entre sí, prevalecerá la más favorable al consumidor.
- Se exige adaptar estos contratos para garantizar su comprensión a las personas con discapacidad visual o auditiva.
- Se establece nueva obligación de proporcionar los Contratos de Adhesión al organismo fiscalizador competente.
- Al momento de celebrar un contrato de adhesión, el proveedor deberá informar a los consumidores acerca de los mecanismos y condiciones para ponerle término.
- Se reconoce al consumidor el derecho a solicitar, sin expresión de causa, el bloqueo permanente de las tarjetas de pago.
- Los proveedores deberán entregar a los consumidores que lo soliciten, dentro de los 5 días hábiles, los certificados necesarios para renegociar los créditos. Y, en caso de cobro de intereses o reajustes indebidos, deberán ser devueltos en el plazo de cinco días contados desde el momento del cobro.
- El proveedor de productos o servicios financieros no podrá condicionar que la compra se realice exclusivamente con un medio de pago ni ofrecer descuentos asociados exclusivamente a un medio de pago.
- Antes de la celebración de una operación de crédito de dinero, los proveedores de servicios financieros deberán analizar la solvencia económica del consumidor debiendo informarle del resultado de dicho análisis.

Otros aspectos relevantes

La norma reduce del 20% al 10%, los pagos anticipados que requerirán del consentimiento del acreedor[1] respecto a las operaciones de crédito, e introduce nuevas previsiones respecto a los contratos celebrados por medios electrónicos o respecto a las obligaciones de información para proveedores de vehículos motorizados nuevos, entre otros.

b. Circular Interpretativa sobre protección de los consumidores frente al uso de sistemas de inteligencia artificial en las relaciones de consumo.

Esta Circular contiene reglas interpretativas para fijar el alcance de la normativa sobre protección de los derechos de los consumidores respecto a los riesgos derivados del uso de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), en el marco de una relación de consumo regida por la Ley de Protección al Consumidor.

En este sentido, el documento reconoce por un lado los beneficios que los sistemas de IA ofrecen en el marco de las relaciones de consumo y, por otro, los riesgos respecto a la salvaguarda de los derechos de los consumidores.

Con el fin de establecer los criterios adecuados para una oportuna salvaguarda de los derechos de los

consumidores respecto a los usos de sistemas de IA, las reglas interpretativas de la Circular se estructuran en 5 secciones:

Entrega de información veraz, oportuna y transparente

El proveedor debe proporcionar a los consumidores información significativa relativa al uso de sistemas de IA. Entre ella: la finalidad de los sistemas de IA utilizados, su injerencia en el proceso de contratación o de ejecución del contrato, la naturaleza de la interrelación del sistema de IA con el consumidor y los datos personales que son tratados por el sistema.

Resguardo de la libertad de elección

El uso de algoritmos predictivos puede afectar a la libertad de elección de los consumidores mediante la manipulación indebida de su voluntad al ver guiadas sus decisiones haciendo menos visibles ciertas opciones y forzando ciertos comportamientos. Por ello, el proveedor no puede utilizar tecnologías que socaven esta capacidad de elección con el fin de asegurar un consentimiento válido.

Seguridad en el consumo

Los sistemas de IA utilizados deberán presentar estándares adecuados de precisión, fiabilidad y efectividad técnica para evitar daños a los consumidores. En este sentido, los proveedores deberán evaluar los riesgos que puedan derivarse para los consumidores a partir del uso de sistemas de IA y verificar que funcionan correctamente y que no incurren en prácticas ilegales que atenten contra los derechos de los consumidores.

Prohibición de toda discriminación arbitraria

Los consumidores tienen derecho a no ser discriminados arbitrariamente por parte de los proveedores, lo que implica que no se podrá negar injustificadamente a determinadas personas la venta de bienes o la prestación de servicios. Una cuestión complicada dada la diferenciación injusta que el uso de los sistemas IA pueden ocasionar como consecuencia de procesamientos de datos personales incorrectos, el entrenamiento del modelo de IA basado en datos sesgados o que carecen de representatividad o por deficiencias en el proceso de elaboración de perfiles.

Protección de los datos personales de los consumidores

Todo tratamiento de información de carácter personal debe sustentarse en una base legal y el uso de aquella debe ser sólo para los fines para los cuales los datos personales fueron recolectados e informados al momento de recabar el consentimiento del titular de los datos. Asimismo, es necesario garantizar el ejercicio de los derechos ARCO: derecho de acceso (o información), rectificación, cancelación (o eliminación), bloqueo y oposición.

Igualdad de oportunidades para las mujeres

El pasado mes de octubre se publicó el Decreto Ejecutivo 242 que modifica y adiciona artículos al Decreto Ejecutivo 53 de 25 de junio de 2002 que reglamenta, a su vez, la Ley 4 de 29 de enero de 1999 por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Antecedentes

Con la aprobación de la Ley 4 de 29 de enero de 1999 que instituyó la igualdad de oportunidades para las mujeres en la República de Panamá, su desarrollo reglamentario[1], la Ley 71 de 23 de diciembre de 2008 que creó el Instituto Nacional de la Mujer, así como la adhesión de Panamá a la Coalición Internacional para la Igualdad salarial, se ha ido tejiendo el marco jurídico adecuado para impulsar la igualdad de género en todo el territorio nacional.

A pesar de todo este elenco normativo referente a la igualdad de oportunidades para las mujeres, todavía resultaba necesario reforzar este marco jurídico y con el fin de prevenir y combatir la desigualdad salarial contra las mujeres, tanto en el sector público como privado, se publicó el Decreto 242 en el que se regulan, entre otros, los siguientes aspectos:

Información estadística de igualdad de género

De acuerdo con el Decreto, las entidades encargadas de la información estadística relacionada a indicadores de género deberán compartir los informes que mantengan con el Consejo Nacional para la Paridad de Género y la Secretaría Ejecutiva de Gabinete Social. Todo ello, con el fin de que el Consejo pueda incorporar indicadores de género al Sistema de Estadística Nacional, crear bases informáticas, así como mecanismos para su mantenimiento, ampliación y mejora.

El objetivo de esta modificación también se centra en la capacitación del personal de las unidades que generen este tipo de información estadística, y así incorporen indicadores desde la perspectiva de género.

Igualdad en la empresa privada

Con este Decreto se adiciona un nuevo precepto a la norma del año 2022, para exigir a los empleadores de empresas privadas, el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten trabajo de igual valor y bajo las mismas condiciones laborales, garantizando las oportunidades de las mujeres sin discriminación en las relaciones laborales. Además, con esta nueva previsión, se declaran nulas las cláusulas que figuren en los contratos laborales en las que se establezca como obligatorio el pago inferior a una trabajadora mujer que realice la misma labor, desempeño en puesto, jornada, condiciones de eficiencia, valor y tiempo de servicios que un trabajador varón.

Igualdad de salario en el ámbito público y campañas de sensibilización

En el ámbito público, se garantizará la igualdad de remuneración mediante la Ley de Escala General de Sueldos para funcionarios del Estado y se promoverá, a través del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Mujer y la Dirección de Carrera Administrativa, la presencia igualitaria de

mujeres en los diversos puestos y niveles de la administración pública. Se prevé además, la organización de campañas de sensibilización permanentes, a fin de fomentar la igualdad de remuneración y la brecha salarial, tanto en el ámbito público como privado.

Sello de Igualdad de Género

La norma prevé la expedición de placas a entidades públicas y privadas, que certifiquen el cumplimiento anual en buenas prácticas laborales en igualdad de remuneración. Para la obtención de esta certificación, expedida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, las entidades que participen en el Programa del Sello de Igualdad de Género, deberán cumplir con los estándares e indicadores requeridos.

La digitalización en las microfinanzas, el informe de CGAP donde Bancamía es uno de los casos de estudio

El pasado mes de octubre el CGAP (*Consultative Group to Assist the Poor*) publicó el informe “Digitalization in Microfinance: Case Studies of Pathways to Success”[1], un informe sobre la digitalización en cinco instituciones microfinancieras (IMFs) en todo el mundo, entre las cuales se estudió el caso de éxito de Bancamía, la entidad colombiana de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA).

Las otras cuatro entidades estudiadas fueron: Amret (Camboya), Microfund for Women (Jordania), Kuraimi Islamic Microfinance Bank (Yemen) y FINCA Impact Finance (global).

El informe aporta una visión global sobre el proceso de innovación tecnológica desarrollado por las IMFs de los casos estudiados con el objetivo de extraer conclusiones y recomendaciones que puedan servir al desarrollo tecnológico de otras instituciones microfinancieras.

CGAP profundiza en diferentes aspectos del proceso de innovación utilizando indicadores cuantitativos (KPIs, indicador clave de desempeño) para medir la madurez de los procesos de digitalización y cómo influyen tanto en la eficiencia de la propia entidad como en la de los propios clientes de las mismas. Y lo hace atendiendo a una serie de preguntas: ¿Cómo se crea valor? ¿Con qué tecnología? ¿Cómo se realiza la gestión del cambio? ¿Cómo se mide en términos de KPI?

En el caso particular del estudio de Bancamía, se pone el foco en las siguientes áreas de negocio de acuerdo a la estrategia digital común del Grupo FMBBVA[2]:

Un mismo core bancario en todas las entidades del grupo.

Estrategia en la nube (Google suite) para compartir documentos y áreas de trabajo y comunicación. Digitalización de los expedientes documentales de los servicios financieros y no financieros prestados.

Un sistema informacional potente orientado tanto a la creación de informes como al análisis para la toma de decisiones.

Una estrategia de los canales digitales a través del desarrollo de un ecosistema de Apps complementarias y dirigidas a los diferentes roles: App de Asesores/Ejecutivos, App de Corresponsales/Agentes y finalmente, la App de Clientes.

El informe pone de manifiesto cifras tales como que la productividad de los ejecutivos comerciales se ha incrementado un 27% gracias a esta estrategia de digitalización, que ha disminuido aproximadamente un 50% el tiempo en la concesión de los créditos o que el número de mujeres que usan la Bancamóvil de Bancamía se ha incrementado un 176% durante el año 2020.

Los casos de estudio fueron seleccionados después de realizar más de 75 entrevistas con diferentes interlocutores entre los que se incluyen 33 entrevistas en profundidad con las IMFs candidatas. La muestra inicial se creó según recomendaciones del propio personal de CGAP, consultores y una serie de expertos internacionales que sugirieron las microfinancieras que, potencialmente, tendrían una experiencia digital más relevante. Además, cabe destacar que la muestra fue representativa en términos de madurez, geografía y tamaño.

[1] Flaming, Mark and Ivo Jeník. 2021. "Digitization in Microfinance: Case Studies of Pathways to Success." Working Paper. Washington, D.C.: CGAP

[2] Grupo FMBBVA conformado por Bancamía (Colombia), Banco Adopem (República Dominicana), Financiera Confianza (Perú), Fondo Esperanza (Chile), Emprende (Chile) y Microserfin (Panamá).

Guía para la protección del consumidor en el comercio electrónico

En Colombia, para muchos, la pandemia ha afectado de manera negativa a varios de los sectores económicos, sin embargo, para otros, también ha sido una oportunidad para la creatividad de nuevas formas para la obtención de ingresos. Por este motivo, han sido muchos los emprendimientos que han crecido y que utilizan las plataformas de internet para ofrecer sus productos o servicios, una nueva forma de comercio denominada comercio electrónico o e-commerce. Esta herramienta ha sido de gran ayuda, no solo para que los empresarios y emprendedores pudieran ofrecer sus productos y servicios, sino también para que los consumidores evitaran desplazarse a un centro comercial, o salir a la calle para obtener los productos básicos para su hogar.

Ante este nuevo escenario y con el fin de proteger los derechos de los consumidores que utilizan estas plataformas tecnológicas, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha expedido recientemente la guía para la protección del consumidor en el comercio electrónico. Una Guía cuyo propósito es generar capacidades, confianza y cultura ciudadana para el uso y apropiación

de la nueva forma que ha surgido para la adquisición de bienes y servicios, a partir de la divulgación de los derechos, deberes y obligaciones de todas las partes involucradas en la celebración de relaciones de consumo a través del comercio electrónico.

El documento constituye la respuesta a las directrices impartidas por el Gobierno de Colombia a través del documento CONPES 4012 del 30 de noviembre de 2020[1], y contempla, entre otros, los siguientes aspectos:

Define el comercio electrónico como el escenario a través del cual se realizan actos, negocios u operaciones mercantiles mediante el intercambio de mensajes de datos entre los proveedores y consumidores de bienes y servicios.

Aclara qué se entiende por portales de contactos, siendo las plataformas tecnológicas en donde personas naturales y jurídicas pueden ofrecer y comercializar sus productos y, a su vez, los consumidores pueden adquirirlos a través de este mecanismo.

Destaca el deber de información respecto a la identificación de los proveedores o productores que concurren a su plataforma a efectos de que los consumidores puedan acudir directamente ante ellos para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Resalta los deberes de los consumidores, con respecto a informarse debidamente de la calidad de los productos adquiridos y su garantía, los términos y condiciones aplicables, y las herramientas con las que cuentan para su defensa.

Consulta la guía [aquí](#)

[1] mediante el cual se busca promover las estrategias para la adopción del comercio electrónico como una práctica común y segura para los consumidores y las empresas.

Prioridades de la ESMA para los informes anuales de 2021

En octubre de 2021 la Autoridad Europea de Valores y Mercados, (ESMA por sus siglas en inglés), emitió su Declaración Pública Anual en la que estableció las prioridades europeas respecto a los informes financieros anuales de 2021 de las sociedades cotizadas.

El objetivo de esta declaración es fomentar la aplicación uniforme de las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)[1] además de los requisitos de información específicos de la UE; y una de las materias más significativas sobre las que se hace hincapié es la importancia de la información financiera y no financiera sobre cuestiones climáticas.

Al igual que en la Declaración emitida el año pasado, el impacto de la pandemia de la COVID-19 sigue siendo una de las prioridades de los informes anuales. En este sentido, se reclama transparencia en el desglose de información sobre sus efectos en los resultados financieros y en la cuantificación de las pérdidas esperadas para las entidades de crédito.

El documento contiene además una sección en la que se recuerda a los responsables de preparación de la información los requisitos en sus directrices sobre medidas alternativas de rendimiento (APM) y otra acerca de la necesidad de utilizar el formato electrónico único europeo (ESEF) para la

presentación de los informes financieros anuales.

[1] IFRS *International Financial Reporting Standards*

Impacto de la COVID-19 sobre la MiPYME en Iberoamérica

En noviembre de 2021 se publicó el informe “Impacto económico de la crisis COVID-19 sobre la MiPYME en Iberoamérica”, un documento elaborado por investigadores de diferentes universidades iberoamericanas e instituciones oficiales de apoyo a la mipyme, a partir de datos[2] extraídos de las encuestas realizadas a empresas de diferentes tamaños, tipologías y sectores de toda Iberoamérica.

En el documento se describe el impacto de la crisis COVID-19 en el empleo, en las ventas, en el acceso a la financiación y en la actividad innovadora de las Mipymes; y se incluyen además, cuadros y gráficos en los que se diferencian los resultados obtenidos según la tipología de empresa encuestada.

El informe pretende ser de utilidad a empresas y a otros agentes económicos y sociales puesto que facilita información relevante que puede servir de guía para el establecimiento de políticas de apoyo a estas empresas. Y todo ello, con el fin de plantear las estrategias más efectivas para hacer frente a la reactivación económica que necesita esta región.

[1] El observatorio es una estrategia de la Alianza Interredes para la cooperación académica entre redes universitarias: la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme - AEDPYME-, la Red Universitaria Iberoamericana sobre Creación de Empresas y Emprendimiento -MOTIVA-, la Red Latinoamericana de Innovación y Emprendimiento -RLIE- del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración -CLADEA- y la Red Universitaria de Emprendimiento REUNE de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN.

[2] El análisis se ha llevado a cabo a partir de la información procedente de una encuesta realizada a directivos de 9.300 mipymes iberoamericanas. La recogida de información fue online con seguimiento telefónico. El trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021.

Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Gobierno de Colombia, con el propósito de actualizar las directrices e impulsar acciones intersectoriales que establezcan las bases para el despliegue y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación expidió el documento CONPES 4023, que tiene como fin incrementar la contribución en esta materia al desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país con un enfoque diferencial, territorial, y participativo.

Esta Política propone para su ejecución 7 ejes estratégicos transversales: (i) fomentar el talento y el empleo en ciencia, tecnología e innovación; (ii) mejorar la generación de conocimiento; (iii) aumentar la adopción y la transferencia de tecnología; (iv) incrementar la apropiación social del conocimiento; (v) aumentar el uso de las potencialidades regionales, sociales, internacionales; (vi) mejorar la dinamización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), e (vii) incrementar y optimizar la financiación en este asunto.

Respecto a las acciones que se pretenden desarrollar con esta Política, se encuentran las siguientes:

- Generar orientaciones inclusivas para la promoción de acciones que incluyan las vocaciones en ciencia, tecnología e innovación dentro de los Proyectos Educativos Institucionales de las instituciones educativas del país.

- Implementar una política de ciencia abierta para el país. Esta política incluirá el fomento al acceso al conocimiento y publicaciones abiertas; el fortalecimiento de las capacidades nacionales; la apertura de metodologías y herramientas; el pilotaje de revisión por pares abierta; la definición de métricas alternativas de productividad, entre otros.

- Articular la oferta en torno al incremento de la investigación, desarrollo e innovación en las empresas para mejorar la productividad incluyendo servicios de extensión tecnológica.

- Definir lineamientos que permitan la construcción de un programa de incentivos crediticios y garantías para las micro, pequeñas, y medianas empresas (MYPIMES), que promuevan la importación, compra, y uso, de nuevas tecnologías, así como el desarrollo, adopción, y adaptación, de tecnologías.

Reglamentación del Microseguro

El pasado 25 de noviembre la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá emitió el Acuerdo nº 1 de por el que se reglamenta la figura del microseguro, una figura regulada en el artículo 23.3 de la Ley 12 de 3 de abril de 2012 sobre Seguro y Reaseguro y carente de desarrollo hasta el momento.

Una reglamentación que resultaba necesaria según la Junta Directiva de la Superintendencia y entre los aspectos regulados, destacan los siguientes:

Definición de Microseguro y sus características

La norma define al microseguro como un mecanismo financiero que tiene como fin proteger a personas del sector informal, principalmente trabajadores de bajos ingresos y personas que suelen ser desatendidas por los esquemas habituales del seguro tradicional, de accidentes, enfermedades, fallecimientos dentro de la familia y desastres familiares.

Según se establece en el Acuerdo, para que un producto sea considerado como microseguro, deberá cumplir con ciertos requisitos:

Responder a un perfil de riesgo y necesidades de protección de un grupo específico asegurable. Ofrecer coberturas adecuadas a las características del sector al cual se dirigen.

La póliza deberá encontrarse redactada en un lenguaje sencillo y simplificado, garantizando un proceso de suscripción y atención simple y claro para el asegurado.

Los precios deben ser más bajos que el resto de productos ofertados habitualmente en el mercado. El pago de la prima deberá realizarse de la manera y periodo estipulado en la póliza, detallando si aplica la suspensión o cancelación del contrato en caso de incumplimiento por parte del asegurado.

No deben darse exclusiones para el acceso al producto, pero en caso de existir, deben ser concordantes y mínimas, en relación a las coberturas ofertadas.

Riesgos y coberturas elegibles para microseguros

Podrán ser elegibles para su comercialización dentro del segmento de microseguros los riesgos y coberturas de vida a término individual, accidentes personales, rentas por hospitalización o enfermedad, atención dental, gastos funerarios, multirriesgo para residencias familiar, cancelación de viajes, extensión de garantía de fabricante o distribuidor para bienes, renta por muerte o incapacidad, rentas temporales o vitalicias, asistencia vial o al hogar y riesgos agropecuarios.

Asimismo se prevé que, previo consenso entre los gremios y/o asociaciones de aseguradoras, se podrá ampliar este listado de riesgos y/o coberturas, permitiendo la comercialización de otros productos que se puedan considerar beneficiosos para los consumidores.

Póliza, existencia del contrato y comunicaciones al asegurado

Las solicitudes y pólizas de microseguros deberán contar como mínimo con los siguientes datos:

Identificación de la compañía aseguradora y datos del contratante.

Identificación del corredor de seguros, número de licencia o detalle del canal de comercialización.

Identificación del asegurado: nombre completo, fecha de nacimiento, cédula de identidad personal o pasaporte, domicilio completo.

Datos de los beneficiarios del microseguro.

Fecha de emisión y vigencia de la póliza.

Detalle de las coberturas y exclusiones mínimas de la póliza, en caso de existir.

Procedimiento para solicitar el pago de la indemnización y la atención de reclamos.

Monto, plazo y forma de pago de la prima. Dentro de este monto, deberán incluirse los gastos relacionados a la emisión de la póliza.

Para demostrar la existencia del microseguro, bastará con presentar la póliza y el comprobante de pago con la información del microseguro contratado.

Respecto a las comunicaciones al asegurado, serán válidos los mecanismos directos de comunicación como domicilio físico o correo electrónico, previo acuerdo entre las partes. Este detalle deberá constar por escrito en la póliza y la aseguradora deberá mantener constancia de las acciones realizadas.

Registro de modelo de pólizas

Las compañías aseguradoras deberán presentar las pólizas de microseguros individuales y colectivos, así como sus notas técnicas, para su aprobación a través de la Superintendencia. Una vez aprobada y emitida la resolución formal por parte de la Superintendencia, podrá comercializar el producto al día siguiente de su autorización.

Otras consideraciones

Según dispone el Acuerdo, la póliza de seguro podrá ser modificada, previa autorización de la Superintendencia. Estos cambios deberán ser comunicados en un periodo no mayor a 30 días hábiles al asegurado. En caso de darse el rechazo del contratante ante estas modificaciones, la aseguradora podrá optar por no proceder con la renovación del producto al vencimiento.

En relación a la comercialización, podrá realizarse directamente por las compañías aseguradoras, a través de corredores de seguros o mediante canales de comercialización alternativos. En todo caso, serán responsables las aseguradoras ante los errores, omisiones y perjuicios que ocasionen a los asegurados o contratantes, derivados de la comercialización del microseguro.

Por último, la norma dispone que el proceso de debida diligencia de este producto, se realizará de manera ampliada, detallando en su artículo 12 los datos requeridos para la mitigación del riesgo, documentación y seguimiento.

Participación activa de los adultos mayores

El pasado mes de noviembre se publicó la Ley 253 con el fin de facilitar oportunidades económicas y comerciales para los adultos mayores de 60 años y promover la llamada economía plateada para el logro de una igualdad de oportunidades sin discriminación de edad en lo que a emprendimientos se refiere.

Con esta Ley se posibilita el acceso a este segmento de la población, a programas y formación sobre emprendimientos y se pretende aliviar la brecha y discriminación existente entre los adultos mayores que desean emprender y hasta ahora no contaban con el apoyo, formación y orientación necesarios para ello.

Adulto mayor, economía plateada y emprendimiento de adulto mayor

Según se dispone en la Ley, adulto mayor es toda persona de 60 años de edad o más, la economía plateada es el conjunto de productos y servicios dirigidos a personas mayores de 60 años y por emprendimiento de adulto-mayor se entiende aquellas empresas creada por personas mayores de sesenta años, cuyos ingresos brutos o facturación anual sea un máximo de dos millones quinientos mil balboas (B/.2.500.000.00).

AMPYME: capacitaciones y programas

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) será la entidad encargada de llevar a cabo la consecución de este proyecto social, y entre sus tareas, destacan:

La promoción del emprendimiento de adultos mayores, mediante programas de formación, tutorías y asesoramientos que impulsen su desarrollo empresarial.

La promoción de la economía plateada mediante campañas audiovisuales, visuales y auditivas, organizadas por el AMPYME.

Emisión de un logo identificativo para las empresas que formen parte de la economía plateada

Creación de programas socioeconómicos de capacitación especialmente dirigidos a la población adulta mayor

Establecimiento de programas de financiamientos flexibles exclusivos para este tipo de emprendimientos.

Otras consideraciones

Aunque la Ley fue publicada en la Gaceta Oficial No. 29412-B de fecha 9 de noviembre de 2021, entrará en vigor en mayo de 2022 y deberá ser reglamentada dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su promulgación.

Seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario

El pasado 30 de diciembre, el Congreso de Colombia, con el propósito de otorgar mayor seguridad jurídica y financiera al Seguro Agropecuario, expidió la Ley 2178 de 2021 que busca ofrecer este producto como una alternativa para asegurar la estabilidad del mismo a lo largo del tiempo, dando una tranquilidad al mercado de la suficiencia de recursos, y permitiendo el diseño e implementación de nuevos instrumentos de gestión de riesgo que se acoplen a las diferentes necesidades del sector.

De igual manera, se pretende desarrollar nuevos esquemas de aseguramiento que cubran a los pobladores rurales que no son atendidos por el seguro tradicional y ampliar las coberturas de los seguros incentivados: seguros inclusivos, seguros paramétricos y por índice (incluidos aquí los seguros de tipo catastrófico, riesgos naturales, meteorológicos, geológicos, biológicos, antrópicos, entre otros), y seguros al ingreso.

Así mismo, se requiere armonizar las normas del seguro agropecuario y brindar estabilidad financiera para el FNRA (Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios), que es la principal fuente de recursos de los instrumentos de gestión de riesgos en el sector agropecuario, del cual dependen instrumentos de riesgo tales como el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) y el Incentivo a la Coberturas Cambiarias, lo cual es fundamental para poder apalancar los nuevos esquemas de aseguramiento y sus coberturas, teniendo en cuenta que solamente se apalanca con recursos de la Nación.

Dentro de los aspectos destacados de la ley es la creación del sistema de información para la gestión de riesgos agropecuarios entregando así unos lineamientos que permiten focalizar y definir reglas claras para el acceso a los subsidios, priorizando a los pequeños productores rurales y establecimiento todo un plan de acceso a la información que permita concientizar a los trabajadores del campo sobre la importancia del aseguramiento.

Y todo ello dado el contexto en el que se encuentra la producción agropecuaria: está expuesta a riesgos de diferente origen como son los naturales (geológicos, climáticos), fitosanitarios (plagas y enfermedades) y de mercado (fluctuaciones de precios de productos e insumos, tasa de cambio), que afectan tanto la productividad como los rendimientos y, por ende, la rentabilidad y los ingresos de los productores.

Protección temporal para migrantes venezolanos

El pasado mes de noviembre la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular 71 en la que recuerda la prórroga automática por dos años de los PPT (Permisos de Protección Temporal), y que durante ese periodo, seguirán siendo válidos como medio de identificación para la vinculación al sistema financiero.

Con la expedición del Decreto 216 de 2021, comentado en [Progreso 25](#) por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se adoptaron disposiciones en materia migratoria para la regularización de los migrantes venezolanos que se encontraran en territorio colombiano, a través de la creación del Permiso de Protección Temporal PPT, documento de identificación que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio colombiano en condiciones de regularidad migratoria especiales, pudiendo por tanto ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país durante su vigencia.

Ahora, en relación a los documentos creados con anterioridad para la identificación de población migrante venezolana en Colombia, tales como el Permiso Especial de Permanencia - PEP (en todas sus fases, incluido el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización - PEPFF), el Gobierno de Colombia estableció un régimen de transición al Permiso de Protección Temporal - PPT, para finalmente hacer el tránsito definitivo al régimen ordinario de regulación migratoria.

En este sentido, la Superintendencia Financiera de Colombia como institución de inspección vigilancia y control de las entidades financieras, reitera que a partir de la publicación del Decreto 216 de 2021, todos los Permisos de Permanencia quedan automáticamente prorrogados por dos años (hasta el 28 de febrero de 2023), y que, durante ese periodo, los mismos seguirán siendo válidos como medio de identificación para la vinculación al sistema financiero. De igual manera sucede con el Permiso de Protección Temporal - PPT, el cual es un documento con plena validez para la identificación de su titular y por lo tanto deberá ser admitido por las entidades financieras colombianas para la apertura y contratación de productos y/o servicios financieros.

Sistemas de pago de bajo valor

El pasado mes de octubre la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 020 en materia de adquirencia, servicios de pago y promoción de protección al consumidor financiero de dichos servicios.

La tendencia de innovación financiera, el mayor uso de tecnología y el incremento en el flujo del comercio electrónico en los últimos años en Colombia, han generado profundos cambios en el sector de pagos, permitiendo que las transacciones en el mundo se realicen de forma digital e inmediata, en condiciones cada vez más competitivas e interoperables.

En concordancia con lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia fortalece la reglamentación que ha sido expedida por el Gobierno en relación con los Sistemas de Pago de Bajo Valor y en particular sobre las siguientes actividades: (i) la actividad de adquirencia que realizan los establecimientos de crédito y las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE); y, (ii) provisión de servicios de pago por parte de las Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (EASPBV).

Entre los aspectos más relevantes destacan:

Se definen las reglas para la vinculación a EASPBV de los participantes no vigilados que presten servicios de aplicación de comercio electrónico para almacenar, procesar y/o transmitir el pago correspondiente a operaciones de venta en línea con tarjetas débito o crédito.

Se incorporan obligaciones en materia de suministro de información a los consumidores financieros por parte de las EASPBV y SEDPE que presten servicios de adquirencia.

Se establecen reglas en materia de gobierno corporativo de las EASPBV.

Promoción del sector agropecuario

El pasado 6 de enero el Congreso de la República publicó dos normas para promover y fortalecer el sector agropecuario: la Ley 2186 por la que se fortalece el financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios y la Ley 2183 sobre insumos agropecuarios.

Históricamente en Colombia, la relevancia del sector rural en general y agropecuario en particular, ha sido preponderante. Fue alrededor de este sector entorno al cual se forjó tanto el desarrollo económico como social de la nación. A pesar de lo anterior, en las últimas décadas el país ha sido testigo de la pérdida de protagonismo del sector agropecuario. Diversos estudios sectoriales han concluido que uno de los factores que no ha permitido el desarrollo y crecimiento del sector en los últimos años es el poco financiamiento, y muy especialmente el poco financiamiento que va dirigido hacia los pequeños y medianos productores agropecuarios. Y ante este escenario, se han publicado las normas citadas:

Insumos agropecuarios. Ley 2183

Una de las normas aprobadas recientemente es la Ley 2183 de 2021, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios (SINIA), se establece la política nacional de insumos agropecuarios y se crea el fondo de acceso a los insumos agropecuarios.

Todo ello, con el fin de promover el uso eficiente, competitivo, racional y sostenible de los insumos agropecuarios y, en general, establecer el buen funcionamiento del sector agropecuario y rural.

Esta ley otorga un plazo 6 meses al Gobierno Nacional, para que adopte a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), una política nacional de insumos agropecuarios en la que se identifiquen y determinen estrategias, prioridades, mecanismos o medidas para el uso eficiente,

competitivo, racional y sostenible de los insumos agropecuarios.

Dicha política hará énfasis en el uso de recursos de carácter biológicos como bio insumos, las mezclas orgánico-minerales y bio-preparados, con el objeto de disminuir costos en la producción de alimentos, mejorar la inocuidad y preservar los recursos naturales. Así mismo, hará énfasis en desarrollar programas de formación dirigidos a los productores agropecuarios para que utilicen esta clase de productos en sus unidades productivas.

Financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Ley 2186

Con el propósito de dar un mayor protagonismo a este sector, el Congreso de Colombia expidió la Ley 2186 de 2021 que tiene como objetivo incrementar la financiación de los pequeños y medianos productores agropecuarios del país que se ubican en el área rural del territorio donde se presenta una mayor incidencia de pobreza monetaria y de la pobreza monetaria extrema.

Según la norma, será la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario -organismo rector del financiamiento y del manejo de riesgos de este sector de la economía- quien defina los bienes y servicios que podrán financiarse con cada una de las clases de crédito que se encuentran descritas en la Ley. Para ello, el destino de las colocaciones sustitutivas o mecanismos alternativos para el cumplimiento de las inversiones en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) a las que están obligadas las entidades financieras, será como mínimo de un 50% para pequeños y medianos productores.

Así mismo la Comisión podrá incrementar la financiación para pequeños y medianos productores agropecuarios organizados o no, a través de asociaciones o cooperativas y/o de cualquier otra forma asociativa, que desarrollen proyectos productivos. Estos créditos podrán ser respaldados con garantías nacionales y/o garantías internacionales complementarias en un 90% para pequeños productores y en un 80% para medianos productores.

Educación. El reto

Transcurrido dos años de la pandemia mundial COVID-19, se ha hecho aún más evidente que una de las mayores deficiencias en América Latina es la educación.

Previo al año 2020 se mostraban datos desalentadores en Latinoamérica ya que existía una informalidad laboral superior al 50% y para desarrollar un análisis de educación existían retos importantes como la falta de datos sobre series históricas, control de calidad, confiabilidad, indicadores educativos y ausencia de información sobre el sector privado, entre otros.

A partir de la pandemia, que provocó los cierres prolongados de escuelas, donde mundialmente más de 170 millones de niños se quedaron en sus casas se generó una multitud de desafíos para los estudiantes, que van desde el acceso a la educación hasta el deterioro de la salud mental.

En comparación con otras regiones del mundo, América Latina y el Caribe han enfrentado algunos de los cierres de escuelas más largos durante la pandemia. Según datos de la Unesco, las escuelas en los países de ALC estuvieron cerradas total o parcialmente durante 48 semanas en promedio. Los niños y jóvenes tuvieron que aprender desde casa mediante plataformas de aprendizaje a distancia, incluidas las aulas en línea, la televisión y la radio, lo cual ha creado una discusión sobre el aumento

de desigualdades en los resultados educativos y a medida que los estudiantes regresen a la educación presencial regresarán con diversos niveles de pérdida de aprendizaje, potenciando la baja calidad en la educación que ya se presentaba en la región Latinoamericana, lo cual a su vez, expone problemas como la pobreza, corrupción y desigualdad.

América Latina necesitará acciones compensatorias decisivas, inversiones y estrategias específicas para prevenir impactos regresivos a largo plazo ya que el nivel educativo está altamente correlacionado con la informalidad. Esto incluye políticas como capacitar a los maestros sobre cómo acelerar el aprendizaje entre los estudiantes que se están quedando atrás, desarrollar la capacidad de las escuelas para apoyar las nuevas necesidades socio-emocionales de los estudiantes y construir la infraestructura para prevenir interrupciones futuras. Estas políticas también deben ser sensibles a las grandes diferencias en la forma en que estos desafíos se manifiestan y al aumento en la deserción escolar en muchos países.

Para nuestro segmento de microfinanzas esta nueva realidad aumenta los retos que debe enfrentar tanto las IMF como los micro emprendedores, siendo algunos de los más importantes la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la IMF, tecnología digital que permita aumentar escala a menor costo, la formación a nuestros clientes para lograr mercados más resilientes y acceso a servicios financieros en un sector con escasez de recursos.

Debemos visualizar que donde hay educación no hay distinción de clases. Concentremos nuestros esfuerzos en impulsar ambientes flexibles, tecnología y educación inclusiva para generar una mejor calidad de vida en nuestros países.